



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

**“El principio de celeridad y la afectación al principio de
economía procesal en el proceso civil”**

ASESORA:

Abog. Fernández Palomino, Jesús Alicia

PRESENTADO POR:

Bach. García León Alvaro Antonio.

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

LAMBAYEQUE - 2019

**Tesis denominada El principio de celeridad y la
afectación al principio de economía procesal en el proceso
civil, presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por:**

Bach. García León, Álvaro Antonio.

Autor

Abog. Fernández Palomino, Jesús Alicia.

Asesor

Aprobado por:

Dr. Arana Cortez, Miguel Arcángel.

Presidente

Mag. Rivera Paredes, Juan Manuel.

Secretario

Mag. Cevallos de Barrenechea, Carlos Manuel Antenor.

Vocal

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA N° 234

Sustentación para optar el Título de Abogado de don: **Alvaro Antonio García León**.

En la ciudad de Chiclayo, en la Auditorio "José Antonio Silva Vallejo" del Consultorio Jurídico Gratuito de Chiclayo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 11:00 a.m. del día lunes 16 de diciembre del 2019, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE	: Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ.
SECRETARIO	: Mag. JUAN MANUEL RIVERA PAREDES.
VOCAL	: Mag. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA.

Con el objeto de calificar la sustentación del Bachiller **Alvaro Antonio García León**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita al sustentante para que exponga la Tesis titulada: "**EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y LA AFECTACION AL PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL EN EL PROCESO CIVIL**".

Rendido por el bachiller: **Alvaro Antonio García León**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizado con Resolución N° 223-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 05 de diciembre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADO, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho.

Obteniendo el siguiente resultado: **Aprobado**... con la nota de **14:55**. y el calificativo de **Regular**... y apto para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

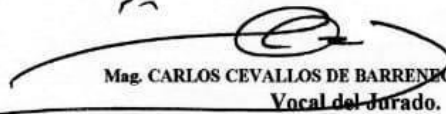
Siendo las **11:55** p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Chiclayo, lunes 16 de diciembre del 2019.


Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
Presidente del Jurado


Mag. JUAN MANUEL RIVERA PAREDES
Secretario del Jurado


Mag. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todos los docentes de nuestra escuela profesional que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, por la orientación, motivación y apoyo recibido a lo largo de estos años.

Especial reconocimiento merece el interés mostrado por mi trabajo y las sugerencias recibidas de mi docente Abog. Jesús Alicia Fernández Palomino, por el ánimo infundido y la confianza depositada.

Hago extensiva mi gratitud al personal que labora en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por facilitarnos la ejecución de este trabajo de investigación

Un agradecimiento muy especial merece la comprensión, paciencia y el ánimo recibidos de nuestros familiares. A todos ellos, muchas gracias.

AGRADECIMIENTO

Esta tesis la dedico a Dios quien me guio por el buen camino, dándome energía para seguir adelante y no desfallecer en los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las adversidades.

A mis familiares quien por ellos he podido ser lo que soy. Para mis padres: Álvaro García y Margarita León, por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar y una especial consideración a mi abuelo Fabián León por motivarme espiritualmente desde niño a estudiar la prestigiosa carrera profesional de derecho.

A mis hermanos: Elica García y Fabian García. Por el apoyo moral, espiritual y buen sentido del humor que muchas veces me liberaron de la presión y el estrés.

INDICE

Contenido

Aprobado por:	2
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTO	ii
INDICE.....	iii
INDICE DE TABLAS.....	viii
INDICE DE GRÁFICOS	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xii
INTRODUCCION	14
CAPITULO I.....	17
ASPECTOS METODOLÓGICOS	17
1.1. Realidad Problemática	17
Planteamiento del problema	17
Formulación del problema.....	18
1.2. Justificación e importancia del estudio.	18

Justificación del estudio.....	18
Importancia del estudio.....	19
1.3. Objetivos	19
Objetivo General	19
Objetivos Específicos	19
1.4. Hipótesis	20
1.5. Variables	20
1.5.1. Variable independiente	20
1.5.2. Variable dependiente	20
1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos	20
1.7. Métodos	20
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico	21
1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico	21
1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo	21
1.6.1.4. Método Inductivo	22
2.1.1. Técnicas	22
2.1.2. Instrumentos	24
CAPITULO II	27
ENFOQUE GENERAL DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES	27
2.1 Principios Procesales Amparados en la Constitución	27

2.1.1	Exclusividad y Obligatoriedad de la Función Jurisdiccional	
	28
2.1.2	Independencia de los Órganos Jurisdiccionales	29
2.2	Principios Procesales Regulados en el Código Procesal Civil	30
	2.2.1	Iniciativa de Parte 30
	CAPÍTULO III	32
	LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD PROCESAL Y ECONOMÍA	
	PROCESAL, EFECTOS ANTE EL CONGESTIONAMIENTO JUDICIAL	32
3.1.	CELERIDAD PROCESAL:	32
3.2.	LA ECONOMÍA PROCESAL	36
3.3.	Tutela jurisdiccional de derechos	46
3.4.	El factor tiempo: sus problemas y las relaciones con el debido	
Proceso.		47
3.5.	Estados óptimos en los procesos civiles	49
	3.5.1. Proceso de conocimiento.	49
	3.5.3. Proceso Sumarísimo:	50
3.6.	Casos en que se incurren en retrasos en la administración de	
	justicia:	51
	Retrasos en la celebración de las vistas y actos judiciales	51
	Retraso en la tramitación de los procedimientos	52
3.7.	Celeridad Procesal y Debido Proceso.	53

3.8.	Proceso:	54
3.9.	Proceso Civil	55
3.10.	ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN CUANTO AL CONGESTIONAMIENTO JUDICIAL.	57
3.11.	Las Medidas Autosatisfactivas y la Tutela Urgente.....	58
3.12.	Justicia de Paz	59
3.13.	A modo de conclusión	60
CAPITULO IV		62
ANÁLISIS Y RESULTADOS		62
4.1	Resultados del Análisis Jurisprudencial.....	63
4.2	Cuadros Estadísticos (Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque)	64
4.3	Entrevistas Aplicadas A Jueces y Especialistas De la Corte Superior de Justicia De Lambayeque.....	73
4.4	Encuestas Aplicadas A Jueces Y Especialistas De la Corte Superior de Justicia De Lambayeque.....	83
4.5	Encuestas Realizadas A Los Ciudadanos Involucrados En Un Proceso Judicial	85
CAPITULO V		88
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....		88
5.1.	Discusión De Los Resultados	88

5.1.1 Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la teoría jurídica de los principios procesales en el ordenamiento legal peruano”	88
5.1.2 Discusión del objetivo: “Estudiar los principios de celeridad y economía procesal para determinar los efectos de su aplicación sobre el congestionamiento judicial	90
5.2 Resultados De La Validación De La Hipótesis	94
5.2.1 Respecto a la variable independiente: Inaplicación del Principio de celeridad procesal.....	94
5.3 Contrastación De La Hipótesis	97
CONCLUSIONES	100
RECOMENDACIONES	102
PROPUESTAS.....	103
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre desalojo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	64
Tabla 2: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre reivindicación en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	65
Tabla 3: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre Mejor Derecho a la Propiedad en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	66
Tabla 4: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre Nulidad de Acto Jurídico en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque	67
Tabla 5: Producción judicial de manera específica de los procesos de desalojo, reivindicación, mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico; tramitados en los juzgados civiles de la Ciudad de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque entre los años 2015- 2018	71
Tabla 6: Respuestas de la pregunta N° 1 de la encuesta aplicada a los Jueces y Especialistas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque	83
Tabla 7: Respuestas de la pregunta N° 2 de la encuesta aplicada a los ciudadano involucrados en un proceso judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	85

INDICE DE GRÁFICOS

Ilustración 1: Producción judicial de manera general de los juzgados civiles de Lambayeque entre los años 2015 – 2018.....	69
Ilustración 2: Producción judicial de manera específica de los procesos de desalojo, mejor derecho de posesión e interdictos; tramitados en los juzgados civiles de Lambayeque entre los años 2015- 2018.	71
Ilustración 3: Gráfico porcentual de las respuestas de la pregunta N° 1 de la encuesta aplicada a los Jueces y Especialistas en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	83
Ilustración 4: Gráfico porcentual de las respuestas de la pregunta N° 2 de la encuesta aplicada a los ciudadano involucrados en un proceso judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	86

RESUMEN

El problema existente en el órgano de Justicia de nuestro país, ha venido perjudicando irreparablemente a todos los sujetos que acuden a éste órgano en busca de justicia; Sin embargo en la mayoría de veces se ha visto truncada por la carga procesal existente en el poder judicial, puesto que para llegar hasta la etapa de la sentencia tiene que pasar muchos años provocando de este modo pérdidas económicas para los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.

Dentro de los años de vida independiente que tiene nuestra nación, hoy más que nunca se ha vuelto una insoslayable necesidad que la actividad procesal llevada resuelvan los procesos en un plazo razonable; hecho que de alcanzarse constituiría un paso importante para recobrar la confianza en nuestra Administración de Justicia en el Perú. En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, acostumbrado a reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba en los oídos de los justiciables el aforismo que reza “justicia que no es rápida, no es justicia”. Ya el insigne Couture señalaba que en el proceso, el tiempo es más que

oro, es justicia; lo cual también nos da cuenta de la inversión de horas hombre perdidas como consecuencia de la tardía resolución de un proceso, problema que no compete exclusivamente a las partes procesales, sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la incertidumbre sobre el resultado de la actividad cognitiva del juez, expectativa que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos oportuna, cuanto más demora exista en su resolución.

Palabras Claves: Inaplicación, Principio De Celeridad, Principio De Economía Procesal.

ABSTRACT

The problem that exists in the justice organ of our country has been irreparably harming all the subjects that go to this organ in search of justice; However, in most cases it has been truncated by the existing procedural burden in the judiciary, since to reach the stage of the sentence it has to spend many years thus causing economic losses for citizens immersed in the proceedings judicial.

Within the years of independent life that our nation has, today more than ever it has become an unavoidable need for the procedural activity carried out to resolve the processes within a reasonable period of time; fact that if achieved would constitute an important step to regain confidence in our Administration of Justice in Peru. In the problem of speed of the process and the prompt protection of rights has been a constant doctrine not only in our country, accustomed to more ineffective publicized reforms, with which the aphorism that prays “justice resonates in the ears of the justiciable which is not fast, it is not justice. ” Already the

distinguished Couture pointed out that in the process, time is more than gold, it is justice; which also gives us an account of the investment of lost man hours as a result of the late resolution of a process, a problem that does not belong exclusively to the procedural parties, but also to the confidence of the citizens and the legal security of our country, increase uncertainty about the outcome of the judge's cognitive activity, expectation that is relegated over time and whose solution is less timely, the longer it takes to resolve it.

**Keywords: Inapplication, Principle of Haste,
Principle of Procedural Economics.**

INTRODUCCION

Dentro de los años de vida independiente que tiene nuestra nación, hoy más que nunca se ha vuelto una insoslayable necesidad que la actividad procesal llevada resuelvan los procesos en un plazo razonable; hecho que de alcanzarse constituiría un paso importante para recobrar la confianza en nuestra Administración de Justicia en el Perú. En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, acostumbrado a reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba en los oídos de los justiciables el aforismo que reza “justicia que no es rápida, no es justicia”. Ya el insigne Couture señalaba que en el proceso, el tiempo es más que oro, es justicia; lo cual también nos da cuenta de la inversión de horas hombre perdidas como consecuencia de la tardía resolución de un proceso, problema que no compete exclusivamente a las partes procesales, sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la incertidumbre sobre el resultado de la actividad cognitiva del juez, expectativa que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos oportuna, cuanto más demora exista en su resolución.

Esta crisis mencionada líneas arriba se encuentra configurada esencialmente por el llamado “doble discurso” que existe en nuestra legislación: Mientras que por un lado, los plazos procesales que se establecen en la legislación adjetiva puede que resulten razonables y definidas para predecir en qué momento se puede obtener una respuesta de los órganos jurisdiccionales – caso del artículo 153° de la ley Orgánica del Poder Judicial, referente al plazo de cuarenta y ocho horas para el proveído de

escritos-; por otro lado, éstos se ven desbordados por una serie de circunstancias, entre las cuales se puede detectar la falta de una estrategia integral desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para favorecer la agilidad de los procesos, la inmensa cantidad de procesos que recaen en juzgados especializados, pero que al parecer resultan insuficientes como consecuencia de dicho manejo, así como el manejo lento que se tiene en los Juzgados y Salas Superiores.

Es en base a esta situación procesal que se construyó la formulación del problema que se verifica en el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo es que la inaplicación del principio de celeridad procesal afecta la eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chilclayo, 2015?

Tal cuestionamiento ha permitido construir una respuesta a priori que se constituye en la hipótesis y se mostró de la siguiente manera: Si, la inaplicación del principio de celeridad procesal se debe a falencias de capacitación o de recursos humanos; entonces, se estará produciendo un efecto negativo sobre la eficacia del principio de economía procesal

Tanto la formulación del problema cuanto la hipótesis, han sido compuestas por dos elementos temáticos denominados variables que bajo una relación causal determinan el sentido de toda la investigación puesto que estructuran los objetivos tanto general cuanto específico, siendo que en base a estos últimos se desarrollan los capítulos correspondientes.

En el Capítulo I, se desarrollaron todos los aspectos relacionados con la metodología que se hubo empleado en la tesis, partiendo desde la problemática

hasta llegar a la hipótesis y su diseño de contrastación, señalando además cuáles fueron los métodos utilizados para el fin de la investigación.

En el Capítulo II, se tomó como base del análisis teórico un enfoque general de los principios procesales, teniendo en cuenta el origen de los mismos en función a la Carta Magna, señalando sus características con el fin de reconocer su importancia y la forma en que surten los efectos en el proceso civil.

Luego el Capítulo III, se desarrollaron los contenidos necesarios para identificar las peculiaridades y diferencias entre los principios de celeridad y economía procesal, con la intención de establecer su utilidad y los aspectos que estarían siendo afectados con el ejercicio de la judicatura.

Seguidamente en el Capítulo IV, se plasmaron los resultados del análisis de la realidad en función a la observación temporal del decurso de los casos judiciales en diversas materias civiles, a fin de identificar el elemento demora temporal que representa ineficacia del principio de celeridad y economía procesal.

Finalmente, en el Capítulo V, se ocupó la investigación del desarrollo de la discusión que se enfocó en los objetivos específicos destinados a sentar el criterio correspondiente, con el cual se pudo construir la validación de las variables y por último la contrastación de la hipótesis, en función de lo que se ha podido construir las conclusiones y recomendaciones que se ponen al criterio evaluador del jurado de la investigación.

El Autor.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1.1. Realidad Problemática.

Planteamiento del problema.

El problema existente en el órgano de Justicia de nuestro país ha venido perjudicando irreparablemente a todos los sujetos que acuden a éste órgano en busca de justicia; Sin embargo en la mayoría de veces se ha visto truncada por la carga procesal existente en el poder judicial.

Cabe señalar que una justicia tardía no es justicia, puesto que para llegar hasta la etapa de la sentencia han pasado muchos años provocando pérdidas económicas para los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.

De lo manifestado se puede advertir la inaplicación del principio de celeridad como afectación al principio de economía procesal ambas contenidas en el artículo V del código procesal civil.

Estos hechos ocasionan en la sociedad desconfianza y rechazo a los órganos de justicia, creyendo muchas de las veces en un juez imparcial.

Formulación del problema.

¿Cómo es que la inaplicación del principio de celeridad procesal afecta la eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015?

1.2. Justificación e importancia del estudio.

Justificación del estudio.

La justificación de la presente investigación se basa en:

El principio de celeridad procesal es la pauta y la directriz como debe actuar un magistrado para lograr la solución de un conflicto de intereses de la manera más rápida, segura y oportunamente a fin que se logre la justicia de manera eficiente.

En nuestro sistema se dispone un conjunto de normas que están destinadas a materializar el principio mencionado a fin de que sea aplicado. Sin embargo en nuestra realidad podemos advertir que estos principios no se materializan debido a los sin número de factores que discerniremos en esta investigación y a la vez buscaremos soluciones para disminuir la carga procesal en los diferentes Juzgados.

Para comprobar estos hechos podemos advertir en el extenso periodo que existe entre el inicio de una demanda y la culminación de la misma. Conllevándonos estos hechos al siguiente tema de investigación.

Importancia del estudio.

La importancia del tema propuesto es que nos ayudará a encontrar las razones de los problemas suscitados dentro de los órganos judiciales.

Y una vez encontrados la causa de la inaplicación del principio en cuestión, podremos plantear alternativas de solución para descongestionar el órgano judicial de nuestro país.

1.3. Objetivos.

Objetivo General.

Determinar el efecto que produce la inaplicación del principio de celeridad procesal sobre la eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015.

Objetivos Específicos.

- Desarrollar la teoría jurídica de los principios procesales en el ordenamiento legal peruano.
- Estudiar los principios de celeridad y economía procesal para determinar los efectos de su aplicación sobre el congestionamiento judicial.
- Analizar las causas que provocan la inaplicación del principio de celeridad procesal y sus consecuencias sobre el principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de

Chiclayo, 2015.

1.4. Hipótesis.

Si, la inaplicación del principio de celeridad procesal se debe a falencias de capacitación o de recursos humanos; entonces, se estará produciendo un efecto negativo sobre la eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015.

1.5. Variables.

1.5.1. Variable independiente.

Inaplicación del principio de celeridad procesal.

1.5.2. Variable dependiente.

Eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015.

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.7. Métodos.

En la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos, que sirvieron para un mejor estudio y permitieron desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así se tiene:

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico

Este método fue aplicado para interpretar el sentido de la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal vigente; detalle que se confrontó con la realidad nacional y regional, con lo que se logró obtener una postura orientada por el principio de la ratio legis como resultado, en base a lo cual se pudo contrastar la hipótesis planteada.

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico

Este método fue empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico civil y aquel concerniente al ámbito de protección de la temporalidad en el proceso, lo cual permitió arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo

Al emplear el método hipotético deductivo se pudo verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

1.6.1.4. Método Inductivo

La aplicación de este método permitió analizar el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

2.1.1. Técnicas

En el desarrollo de este tema, se usaron las técnicas de recolección de la información que permitió establecer los parámetros con los que se ha definido la propuesta, permitiendo plantear al final las sugerencias en función a los resultados, técnicas que se procede a describir.

✓ **Análisis Documental.-** Se usaron fichas bibliográficas, las cuales se trabajaron en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros; además de ello se han creado fichas de investigación documental como es el caso de las que se aplicaron sobre los procesos de desalojo, reivindicación, mejor derecho a la propiedad y nulidad de acto jurídico. Es con estos resultados que se van a orientar las búsquedas que corresponden a otras fuentes documentales y de textos que se han publicado en materia de Derecho Civil y Procesal Civil, con el fin de ubicar la naturaleza jurídica de la aplicación de los principios procesales de celeridad y economía procesal.

✓ **Observación.-** Se ha utilizado la guía de observación, con la cual se ha observado la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control social, la misma que se proyectó en un esquema que inicia con el objeto de observación y se configura de la siguiente manera:

GUÍA DE OBSERVACIÓN.

- **Objeto de Observación:** verificación del efecto que produce la inaplicación del principio de celeridad procesal sobre la eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil de los juzgados civiles de Chiclayo durante el año 2015.

- Criterios de observación:

- Duración de los plazos generales en los procedimientos civiles.

✓ **Encuesta.-** Se empleó la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son abogados especialistas en derecho penal, quienes han plasmado sus opiniones respecto de la problemática jurídica advertida en los procesos civiles respecto a la inaplicación del principio de celeridad procesal y en consecuencia la afectación del principio de economía procesal.

Para la determinación de la cantidad de participantes en la encuesta se ha tenido en cuenta el criterio de conveniencia por tratarse de una investigación no probabilística según lo considerado como un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo a lo que se señala “las técnicas de muestreo de tipo no

probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento (...)” (Walpole & Myers, 1966). Por conveniencia porque permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen & Manterola, 2017) (Otzen & Materola, p. 227-232. 2017).

Es en razón de ello la marcación por conveniencia al señalar la muestra de 50 operadores jurídicos que serán abogados litigantes especialistas sobre los cuales se aplica la encuesta para opinar sobre la inaplicación del principio de celeridad procesal y su efecto sobre el principio de celeridad procesal.

2.1.2. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

✓ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y ha servido para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la investigación, las mismas que han trabajado en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros, bajo el siguiente formato electrónico:

Crear fuente

Tipo de fuente bibliográfica: Libro Idioma: Predeterminado

Campos bibliográficos de APA

Autor: Editar

☐ Autor corporativo

Título:

Año:

Ciudad:

Editorial:

☐ Mostrar todos los campos bibliográficos

Nombre de etiqueta:

MarcadorDePosición:

Aceptar Cancelar

✓ **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación, lo cual se ha trabajado en base al formato de guía de observación siguiente:

GUÍA DE OBSERVACIÓN		
Objeto de Estudio:		
Criterio de evaluación	Si	No
Criterio 1	-	-
Criterio 2	-	-
TOTAL	-	-

✓ **La Guía de Encuesta.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la encuesta, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener con los encuestados que son los conocedores del tema, en tanto abogados especialistas en la materia civil y se elaboró en función de los ejes temáticos de la investigación, esto es en base a las variables de investigación bajo el siguiente criterio:

Variable independiente:

La inaplicación del principio de celeridad procesal; sobre la cual se desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina.

Variable dependiente:

La eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015; sobre la cual se desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina.

CAPITULO II

ENFOQUE GENERAL DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES

Para un mayor entendimiento, es necesario partir desde un análisis constitucional, bajo la perspectiva de una visión sistemática entre la norma, la doctrina y la jurisprudencia, se considerado prudente plasmar los siguientes puntos.

2.1 Principios Procesales Amparados en la Constitución:

Son directrices u orientaciones generales en las que se inspira cada ordenamiento Jurídico procesal.

Es así que Gozaini citado por (Rioja Bermudez, 2009) refiere “El desarrollo del proceso permite observar un conjunto de principios que estructuran las denominadas reglas adjetivas del procedimiento. Es el ritual propiamente dicho. El reflejo de cómo se hace un proceso a partir de la orientación que fundamenta cada sistema jurídico procesal”.

Así también se encuentra amparado en el Artículo 139° de nuestra (Constitución Política del Perú, 1993) en el Artículo 139° Inc. 2; en sus diversos artículos como lo son los siguientes:

2.1.1 Exclusividad y Obligatoriedad de la Función Jurisdiccional

El Estado tiene la exclusividad de la administración de Justicia, eso es, que tiene el poder-deber de solucionar la Litis. El poder judicial tiene la hegemonía en la administración de justicia, luego de superada la autodefensa (solución de la Litis empleando la fuerza o violencia), y al no ser viable la autocomposición (solución de la Litis reside en el acuerdo de las partes).

El EXP N° 0023-2003-AI/TC precisa “Conceptualmente, la exclusividad se concibe como la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del poder judicial” (Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra los artículos II y III del Título Preliminar del Decreto N.º Ley 23201, 2004)

Esta exclusividad se constituye como la prohibición que realiza la norma constitucional al legislador para que atribuya potestad jurisdiccional a otros órganos que no estén dentro del Poder Judicial salvo la existencia de la llamada “Jurisdicción Militar”, “Arbitral” y las

confiadas al Tribunal Constitucional o al Jurado Nacional de Elecciones.
(Rioja Bermudez, 2009, pág. 32)

2.1.2 Independencia de los Órganos Jurisdiccionales

Previsto en el inciso 2 del Artículo 139° de la Carta Magna, basada en la tradicional división de los poderes siendo el contrapeso de este principio el de la responsabilidad de los jueces (Artículo 200° del TUO de la LOPJ y Artículos 509 a 518 del C.P.C). (Constitución Política del Perú, 1993)

El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren con estricta sujeción al Derecho y la Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños (otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente judicial) a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. (Rioja Bermudez, 2009, pág. 33)

Este principio se debe entender desde 3 perspectivas:

- a) Garantía del órgano.- Que administra justicia (independencia orgánica), por sujeción al respeto al principio de separación de poderes.

- b) Garantía operativa.- Para la actuación del juez (independencia orgánica), por conexión con los principios de reserva y exclusividad de la jurisdicción.
- c) Capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha independencia. Cabe precisar que en este uno de los mayores males de la justicia ordinaria nacional, en gran medida por la falta de convicción y energía para hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera Constitución republicana se consagra y reconoce. (Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra los artículos II y III del Título Preliminar del Decreto N.º Ley 23201, 2004)

2.2 Principios Procesales Regulados en el Código Procesal Civil

2.2.1 Iniciativa de Parte

Del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se hace mención de este principio, el cual toma mayor relevancia y necesidad de aplicación en los actos procesales; citándose también a los artículos 196º del mismo ordenamiento; que se refiere a la carga de la prueba, este sería el ejemplo más claro de este principio, ya que todo hecho que se argumenta debe acreditarse y le corresponde a quien lo alega; es decir a iniciativa de parte; facultad de toda persona que interpone algún proceso ante el órgano jurisdiccional; y que son las partes procesales y deben motivar a la actuación de los actos procesales, tal y como lo cita (Montero Roca, 1994) “Se basa en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de los derechos subjetivos privados, y lleva a que la tutela jurisdiccional

de los mismos solo puede actuarse, mediante la aplicación del Derecho objetivo, precisamente cuando alguien inste. Si el derecho objetivo existe o no, y si la obligación correlativa existe o no, es algo que solo podrá saberse al final del proceso; pero, de entrada, el proceso solo tendrá sentido si el que lo insta afirma su titularidad del derecho e imputa la titularidad de la obligación al demandado”.

En ese orden de ideas, se aprecia que existe un procedimiento establecido para llevarse a cabo un proceso judicial.

CAPÍTULO III

LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD PROCESAL Y ECONOMÍA PROCESAL, EFECTOS ANTE EL CONGESTIONAMIENTO JUDICIAL.

3.1. CELERIDAD PROCESAL:

(Castillo Quispe & Sánchez Bravo, 2012) Señalan del Principio de la celeridad Procesal lo siguiente:

El principio de celeridad procesal se encuentra recogido en el artículo V, último párrafo, del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual la actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.

Al respecto, es de resaltar que en el artículo 145 del Código Procesal Civil se indica claramente que incurre en falta grave el juez que, sin justificación no cumple con realizar la actuación judicial en la fecha señalada o dentro del plazo legal respectivo.

Haciendo hincapié a los conceptos anteriores, (Zumaeta Muñoz, 2015) señala que este principio está muy ligado al de la economía, por cuanto tiene que ver con el tiempo, la perentoriedad o la improrrogabilidad de los plazos o el impulso de oficio por el juez. Son manifestaciones del principio en estudio el procurar que en un litigio se emplee el menor número de actos procesales.

Sin embargo el profesor (Escobar, 2013) hace una crítica en cuanto a la celeridad procesal, como un principio que está relacionado y caracterizados con muchos problemas sobre la Administración de Justicia en nuestro país por el retardo de los procesos, puesto que por este principio los procesos debería ser oportuno, sin dilataciones, y tener como fin garantizar, hacer efectivo los derechos, puesto que “el principio de celeridad procesal tiene relación con la eficacia y sobre todo por la eficiencia que deberían de cumplir los órganos jurisdiccionales al resolver los conflictos que nacen por cada demanda que le llegan a su despacho”.

Por otro lado, (Hurtado Reyes, 2009) señala del Principio de Celeridad Procesal lo siguiente:

Las manifestaciones del principio de celeridad en el proceso son diversas, aquí encontramos al impulso de oficio como facultad del juez y también la determinación de plazos perentorios e improrrogables que den un

orden al proceso. Estos dos mecanismos buscan acelerar el trámite del proceso y evitan que este se detenga por cualquier circunstancia, en situaciones concretas no hay impulso de oficio (proceso de divorcio y separación convencional) sin embargo, si hay plazos improrrogables que aseguran que las partes puedan realizar los actos procesales en determinado espacio de tiempo.

Otra forma de hacer posible este principio es que el juez realice los actos procesales requeridos dentro del plazo exigido por la norma (calificación de demanda, pronunciamiento sobre saneamiento, emisión de sentencia, resolver nulidades, etc.), ya que en la practica el cumplimiento de los plazos solo resulta exigible para las partes, en tanto que los jueces se toman su tiempo para emitir resoluciones, lo cual estaría atentando contra el principio de celeridad procesal, pues las partes deben respetar los plazos previstos en la norma procesal, en tanto que órgano jurisdiccional no lo hace en la práctica, aunque muchas razones justificatorias deben existir al respecto, pero lo cierto es que ello no debe ocurrir, pues la demora injustificada en dictar los actos procesales por parte del juez vulnera el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva.

Este principio coadyuva a la celeridad en el trámite, procura que el proceso avance de manera rápida pero segura (sin violentar garantías

mínimas) y que no se detenga por ninguna circunstancia, es por ello que se señala que este principio se manifiesta a través del principio de economía procesal. En el proceso donde gobierne la celeridad procesal responsable se encuentra garantizada la emisión de una sentencia oportuna.

En ese mismo sentido (Hurtado Reyes, 2009) considera que la aplicación de este principio fundamentalmente se encuentra en manos del juez, quien debe velar por la sumariidad del trámite (respetando en todo momento las garantías mínimas que propugna el debido proceso), cuanto más célere sea en su actividad y exija lo mismo de las partes, tendrá una relación jurídica procesal exitosa. Las partes y en general la comunidad darán cuenta de los beneficios que trae la aplicación de este principio.

El Artículo V recepciona este principio al señalar “la actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución de conflicto de intereses”.

Asimismo en cuanto a la Celeridad Procesal el “ (Código Procesal Civil, 2015) señala que es el juez quien dirige el desarrollo del proceso y asimismo señala que toda diligencia se realiza en los plazos establecidos, siendo el juez quien dirige a los operadores judiciales”.

Hay que considerar que los principios que rigen el código Procesal Civil son imperativos y de suma importancia para cumplir correctamente nuestro proceso y sobre nuestra tutela jurisdiccional efectiva se regule y no se vulnere como suele suceder a veces. Por ello es que se regulan leyes que promueven los principios. (Rioja, 2017) Hace una relación entre la economía procesal con la celeridad procesal indicando si la celeridad procesal persigue la obtención de una oportuna justicia, sin dilataciones, este objetivo se podría lograr durante todo el proceso si se pudiera eliminar traslados.

Empero para (Canelo, 2015) la celeridad procesal “no es solo un principio sino es parte importante del proceso, puesto que es el servicio de justicia”. Según el autor es importante que el principio de la celeridad procesal se aplique eficazmente en todos los procesos. Asimismo en la normativa Internacional verificamos que también establecen la aplicación de la Celeridad Procesal, citando la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” en su Art. 18 señala que: “Toda persona puede recurrir a los tribunales a hacer valer sus derechos, el cual debe disponerse de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare”.

3.2. LA ECONOMÍA PROCESAL

Como es de advertirse de los conceptos anteriores, no podemos apartarnos del principio de economía procesal, puesto que existe una relación

directa entre cada principio. En ese orden de ideas desarrollaremos. Algunos conceptos.

Por ejemplo para (Castillo Quispe & Sánchez Bravo, 2012) señalan del Principio de Economía Procesal lo siguiente:

(Alfredo Gonzaini, 1992) Afirma que el principio de economía procesal tiene como objetivo el lograr un proceso ágil, rápido y efectivo, en el menor tiempo; finalidades que se consiguen poniendo el acento en la conducta a observar por las partes y en la simplificación que estructure el procedimiento. Dicho autor argentino destaca que el principio de economía procesal orienta al justiciable para obrar con interés y celeridad, poniéndole condiciones técnicas a sus actos.

El principio de economía procesal se encuentra regulado en el artículo V, tercer párrafo, del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que dispone que el juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran. Sobre esto último, el artículo IX del Título Preliminar del citado Código adjetivo señala:

- Que las normas procesales contenidas en este Código (C.P.C) son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

- Que las formalidades previstas en este código (C.P.C) son imperativas, sin embargo, el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso.
- Que cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada.

Según (Zumaeta, 2015) tiene que ver con el ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo referido al proceso. Por ejemplo, en el tiempo, todos los justiciables tienen la necesidad de que sus conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible sin que estos se dilaten. En la economía de gasto se procura que los costos del proceso no sean obstáculo para recurrir al órgano jurisdiccional para hacer efectivos los derechos materiales .Finalmente, en la economía de esfuerzo se debe evitar la realización de actos innecesarios al interior del proceso, buscar llegar a la solución del conflicto pero con el menor esfuerzo, mediante una simplificación de tiempo sin perturbar el derecho de defensa.

(Hurtado Reyes M. , 2009) Señala del Principio de la Economía Procesal lo siguiente:

El ahorro de tiempo, esfuerzo y gasto son importantes en proceso civil contemporáneo, la actividad jurisdiccional debe estar orientada al ahorro de estos tres elementos con el propósito de resolver de la forma más rápida y adecuada el conflicto.

Entonces, el principio de economía procesal busca que el conflicto discutido en el proceso se resuelva en el menor tiempo posible, es decir lograr una justicia pronta (justicia tardía no es justicia) sin dilaciones innecesarias y sin actos procesales que detengan y entrapen el tejido procesal, en un plazo razonable.

Bajo la óptica de (Alfredo Gonzaini, 1992), el tiempo y el proceso pueden abordarse desde dos vertientes. La primera, parte desde los principios procesales que organiza el desarrollo del procedimiento. El siguiente, enmarca la cuestión desde la realidad, es decir, midiendo en términos de lentitud o celeridad la eficacia que del servicio judicial se transmite. El proceso, que es un medio – señala (Couture, 2005)– no puede exigir un dispendio superior al valor de los bienes que están en debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre el fin y los medios debe presidir la economía del proceso.

Si bien en los procesos de cognición no se puede prescindir del tiempo(estudiado este como un hecho natural que genera efectos jurídicos), pues este es necesario para que el juez se genere la convicción necesaria para resolver la controversia, es también imprescindible que el tiempo del proceso sea dosificado y compartido por ambas partes, no es posible que el tiempo que dura un proceso normalmente recaiga como una pesada carga sobre el

demandante, aun en procesos donde todo indica que la sentencia le será favorable al actor, en tal circunstancia el peso del tiempo debe ser distribuido de manera equitativa entre las partes del proceso. De ahí en la actualidad se viene proponiendo la tutela diferenciada de la cual forma parte la tutela inhibitoria, tutela preventiva, tutela urgente (cautelar y satisfactiva) y la tutela anticipatoria (en la cual encontramos la figura de la ejecución de sentencia impugnada), esta nueva figura por el contrario lucha contra el peligro en la demora que podría hacer colapsar el interés o derecho protegido así es la tutela ordinaria es necesario el tiempo para generar certeza en el juez al momento de resolver, en cambio en la tutela diferenciada se lucha contra el tiempo (peligro en la demora).

Esta justicia pronta se debe lograr con el menor esfuerzo posible, a ello coadyuva el principio de concentración, pues la idea es no permitir actos procesales innecesarios, cuanto menor sean los actos procesales en un proceso más rápido se emitirá la decisión final. De ahí que (Couture, 2005) señalara que “en el procedimiento el tiempo es más que oro: es justicia, el tiempo en el proceso debe interpretarse como un equilibrio entre la equidad que un litigio debe desempeñarse en sus necesidades temporales para resolver; y el plazo razonable que, no necesariamente, supone plazos cortos ni rapideces forzadas”.

Asimismo, este principio propone el ahorro de gasto, traducido en el desmedro económico que tienen las partes por la duración del proceso, cuanto

más dure un proceso más será el coste que tienen que asumir las partes. A mayor duración del proceso mayor gasto para las partes. De alguna forma este principio propone el ahorro de gastos.

El Título Preliminar del C.P.C. lo demuestra en el artículo V señalando que el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales...el Juez dirige, el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que la requieran...”

La acumulación es la típica manifestación de este principio, tanto la acumulación objetiva originaria (se acumulan a la demanda pretensiones de forma accesoria, subordinada y alternativa) como la acumulación objetiva sucesiva (al formular reconvención o al acumular procesos) y de hecho la acumulación subjetiva. En este caso hay definitivamente un ahorro de tiempo, costos y esfuerzo porque todo se hace en un solo proceso.

Otro aspecto vinculado a este principio lo constituye el juzgamiento anticipado, esto es cuando el juez decide emitir sentencia porque la cuestión es de puro derecho o no requiere actuar medios de prueba. El ahorro de tiempo en el proceso se presenta igualmente por la configuración de plazos procesales perentorios, es decir cortos, breves (pero razonables) para realizar determinados actos procesales.

La preclusión procesal como la herramienta que permite al juez avanzar el proceso sin retornar a la etapa anterior, y a las partes a realizar los actos procesales en su debida oportunidad propicia la realización de los fines de este principio, como son el ahorro de tiempo, esfuerzo y gasto, pues cerrando el proceso por etapas sin retorno, también se ahorra tiempo y esfuerzo.

El saneamiento procesal es otra aplicación del principio en estudio al igual que el principio de celeridad procesal, pues a través de este se logra determinar la existencia la validez o invalidez de la relación jurídica procesal. (Alfredo Gonzaini, 1992) Considera al saneamiento como un principio pero no destinado a las partes, sino al juez y, en particular, se instala entre sus facultades o poderes de dirección. Se procura expurgar aquellos vicios que inducen al entorpecimiento de la causa, o que provocan dificultades para reconocer el objeto en discusión. Para (Palacio Lino, 1983) el saneamiento procesal deriva del principio de economía procesal, le denomina también principio de expurgación, en cuya virtud se acuerdan al juez facultades suficientes para resolver, in limine, todas aquellas cuestiones susceptibles de impedir o entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa o de determinar, en su caso, la inmediata finalización del proceso.

(Cornejo, 2006) Señala del Principio de la Economía Procesal lo siguiente:

Los jueces deben de considerar que al aplicar eficazmente la economía procesal beneficiarían el proceso, puesto que su función procesal es llegar a emitir una cantidad de sentencias al mes que le sirva para una buena

evaluación como jueces, asimismo aplicándolo en los procesos de alimentos beneficiarían a los menores representados por sus progenitores que son los perjudicados por la demora del proceso.

Por otro lado (Laguna, 2017) señala que la economía procesal “es un medio alternativo para reducir los actos y así agilizar el proceso”, si teniendo en cuenta esto el juzgado no lo aplica estaría entorpeciendo el proceso, y en el caso de los de alimentos vulneraría el Interés Superior del Niño.

Citando a (Gutiérrez, 2017) se puede definir a la economía procesal como “El derecho de todo ciudadano a un proceso sin dilataciones que genera retrasos indebidos”. De igual manera señala también que el principio de la celeridad procesal es una doctrina que ha sido tratado por diferentes autores, teniendo en cuenta que todas las definiciones tienen un mismo manifiesto puesto que este principio tiene como fin ayudar a “obtener la Tutela Judicial efectiva en el proceso”. (p. 71)

“Toda persona puede ocurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo dispone de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. (Gutiérrez, 2017)

En relación al tema de la Economía procesal en este punto, cito a (De La Torre, 2017) quien afirma que la economía procesal trata de lograr los mejores resultados con menos empleos posibles de actos logrando así reducir

y lograr un proceso que no vulnere el debido proceso, es por ello importante considerar que aplicando la economía procesal dentro de los procesos mejoraría el proceso y se llegarían a mejores resultados sin muchos actos. (p. 1)

(De La Torre, 2017) señala que según la legislación Mexicana en su Constitución reposa este principio en su artículo 17º, con la finalidad de que, combinado con la doctrina y correspondencia logren adquirir una eficaz y eficiente administración de justicia por los operadores que son quienes lo ejercen, teniendo en cuenta que hoy en día la carga procesal está creciendo y por ello sería importante y necesario que se aplique la economía procesal y así se beneficiarían todo el sistema judicial y las partes del proceso. Por su pronta y buena administración de justicia. (De La Torre, 2017)

A criterio del autor (De La Torre, 2017), el principio de la economía procesal debe de tratar de llevar el proceso al mejor resultado y con el menor empleo de actos y/o actividades, que permita que el proceso se simplifique y así se delimite con precisión el litigio. (p.1)

Por otro lado (Laguna, 2017) señala que la economía procesal busca evitar actos no necesarios, que pudieran alargar el proceso o procedimiento, consideran que una relación así pondría el acceso a la justicia un mal resultado en el proceso, por ello señala que el proceso se realiza tratando de que se lleve el “desarrollo del proceso en menor número de actos procesales”.

(White, 2008) indica que El principio de economía procesal tiene relación con la justicia pronta” puesto que el afirma que “los procesos deben ser simples, asimismo de tener en cuenta que todo proceso se debe realizar sin poner trámites con actos innecesarios” por esto es importante conocer todos los pasos que se debería de seguir para lograr la sentencia, asimismo se debería de considerar que la aplicación de medios alternativos para llegar a esa sentencia, por ello es importante considerar que este autor considera como “justicia pronta a la realización eficaz de un proceso evitando realizar trámites innecesarios. (p.57)

Asimismo es importante indicar que en el Código Procesal Civil se señala que es el Juez quien se encarga de llevar las actuaciones de los medios probatorios, asimismo el mismo código señala que se exceptúan las actuaciones procesales por comisión, asimismo señala que se puede realizar el desarrollo del proceso en el menor número de actos procesales. (Código Procesal Civil, 2015)

(Palacios, 2017) Señala que la economía procesal significa la abreviación y reducción de los actos durante el proceso trata de que lo innecesario vuelva ineficaz a la T.J.E. el mismo autor confirma lo que muchos autores han señalado que la economía procesal es función judicial, puesto que todos deben tener acceso a la justicia. (p.4)

Consideramos que el principio de celeridad procesal está muy relacionado al de economía procesal porque tiene que ver con el tiempo del plazo. El principio de celeridad procesal tiene que ver con el tiempo del plazo

o el impulso de oficio por parte del órgano judicial. Mientras que el principio de economía procesal tiene que ver con el ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo por los justiciables y el juez durante el proceso.

3.3. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Cuando a los efectos del principio de celeridad nos referimos, estamos haciendo alusión a los múltiples factores que originan el incumplimiento, que puede ser la falta de personal administrativo o jurisdiccional, el incumplimiento de horarios de trabajo, o la incapacidad o falta de interés para ejercer sus funciones.

En ese sentido es que buscamos desarrollar en este capítulo algunos factores que provocan la carga procesal en los juzgados civiles, partiendo como ejemplo de otros juzgados a fin de demostrar que la problemática ocurre en todo los despachos de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

3.3. Tutela jurisdiccional de derechos:

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. (Artículo I, Título preliminar del Código Procesal Civil).

El proceso civil es aquel instrumento puesto por el legislador a fin de que los órganos jurisdiccionales tutelen de los derechos sustanciales de los justiciables. De allí que se hable de “tutela jurisdiccional de los derechos” Por ello y para la

satisfacción de los derechos sustanciales de los justiciables se han desarrollado, tres formas distintas de tutela: tutela cognitiva, tutela ejecutiva y la tutela cautelar.

- a) La tutela cognitiva.- Procura establecer cuál será la situación jurídica entre las partes en conflicto, es decir que el juez tendrá que conocer los hechos expuestos por las partes para que a través de una sentencia, otorgarles el derecho solicitado.
- b) La tutela ejecutiva.- Ya no pasa del hecho al derecho sino por el contrario, en virtud de una sentencia de condena emitida en un proceso de cognición o en base de un documento que la ley le ha conferido mérito ejecutivo, obtenga el trámite de la actividad jurisdiccional para la concreta satisfacción de su derecho.
- c) La tutela cautelar.- Tiene una finalidad asegurativa, es decir para asegurar la eficacia de la decisión definitiva a expedirse en un proceso.

3.4. El factor tiempo: sus problemas y las relaciones con el debido Proceso.

Esta crisis mencionada líneas arriba se encuentra configurada esencialmente por el llamado “doble discurso” que existe en nuestra legislación: mientras que por un lado, los plazos procesales que se establecen en la legislación adjetiva pueda que resulten razonables y definidas para predecir en qué momento se puede obtener una respuesta de los órganos jurisdiccionales – caso del Artículo 153° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente al plazo de cuarenta y ocho horas para el proveído de escritos, por otro lado, estos se ven desbordados por una serie de

circunstancias entre las cuales se pueden detectar la falta de una estrategia integral desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para favorecer la agilidad de los procesos, la inmensa cantidad de procesos que recaen en el juzgado civil, pero que al parecer resulten insuficientes como consecuencia de dicho manejo, así como el manejo lento que se tiene en los juzgados:

- a) Demora en la calificación de demandas, solicitudes cautelares y escritos (lo cual puede demorar hasta meses, lo que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y el código Procesal Civil establecen que sea en cuarenta y ocho horas.
- b) Entre la emisión de la resolución y su notificación pasa un gran tiempo. Así mismo cuando en el reporte emitido por el sistema informático del Poder Judicial se desea saber los fundamentos de una determinada resolución, esto no puede saberse hasta que sea notificada de dicha resolución (pero aún, no puede leer el expediente, ya que lo más probable es que se encuentra en Notificaciones)
- c) El expediente puede quedarse días con el Especialista Legal encargado del mismo, sin que el justiciable pueda tener acceso al mismo. Con ello, se retrasa la presentación oportuna de los recursos del caso.
- d) Se difiere innecesariamente la realización de audiencias, poniendo con razón (pretexto) la recargada agencia de diligencias existentes. Esta situación se encuentra más avanzada en las Salas Superiores.

- e) Cuando el justiciable desea conocer el retraso de los actos procesales, los encargados de Mesa de Partes, le señala que en todo caso debe hablar con el Juez de la causa de ocho a nueve de la mañana (horario establecido en el Perú mediante Resolución Administrativa del Poder Judicial) para agilizar el trámite. Sin embargo, esta labor de entrevista judicial constituye una pérdida de tiempo tanto para el juez (por sus recargadas actividades) como para el justiciable (tiempo que pueden invertirse en otras labores)
- f) La remisión de los expedientes de una instancia a otra, o entre el poder judicial y el Ministerio Público se retrasa por errores de los notificadores o en el llenado de los cargos de remisión.
- g) La Central de Notificaciones suele retrasarse con la emisión de informes, cada vez que los juzgados solicitan los cargos respectivos para agregarlos a los autos. Como se podrá observar hay una falta de atención en puntos neurálgicos de la administración de justicia, como el proveimiento de escritos y la programación de audiencias, lo cual se ve entorpecido por la abundancia de procesos y las formalidades de acelerar los procesos.

3.5. Estados óptimos en los procesos civiles

3.5.1. Proceso de conocimiento.

Plazo para contestar la demanda: 30 días.

Reconvención: si hay. Plazo para contestar la reconvención: 30 días.

Excepciones: 10 días. Plazo para contestar excepciones: 10 días.

Tachas u oposiciones a las pruebas: 05 días. Plazo para absolver tachas u oposiciones: 05 días.

Plazos especiales del emplazamiento: 60 o 90 días.

Saneamiento: 10 días.

Audiencia de pruebas: 50 días. Alegatos: 05 días. Sentencias: 50 días Plazos para apelar la sentencia: 10 días.

3.5.2. Proceso abreviado:

Plazo para contestar la demanda: 10 días.

Reconvención: En algunos casos. Plazo para contestar la reconvención: 10 días.

Excepciones: 05 días. Plazo para contestar excepciones: 05 días.

Tachas u oposiciones a las pruebas: 03 días. Plazo para absolver tachas u oposiciones: 03 días.

Plazos especiales del emplazamiento: 30 o 45 días.

Saneamiento: 15 días. Audiencia conciliatoria: 15 días. Audiencia de pruebas: 20 días.

Alegatos: 05 días.

Sentencias: 25 días Plazos para apelar la sentencia: 05 días.

3.5.3. Proceso Sumarísimo:

Plazo para contestar la demanda: 05 días.

Reconvención: No hay. Plazo para contestar la reconvención: No hay.
Excepciones: Se interpone al contestar la demanda. Plazo para contestar excepciones:

En la audiencia única. Tachas u oposiciones a las pruebas: se actúan en la audiencia única. Plazo para absolver tachas u oposiciones: se actúan en la audiencia única.

Plazos especiales del emplazamiento: 15 o 25 días. Saneamiento: 10 días.

Audiencia conciliatoria: 10 días. Audiencia de pruebas: 10 días. Alegatos: no hay.

Sentencias: 10 días Plazos para apelar la sentencia: 03 días.

3.6. Casos en que se incurren en retrasos en la administración de justicia:

Se aborda el asunto de los retrasos en la Administración de justicia desde dos perspectivas independientemente de los matices o de otras que pueden considerarse igualmente válidas:

Retrasos en la celebración de las vistas y actos judiciales.

Y es que lo primero que aprendemos los Letrados que empezamos en el ejercicio de la profesión cuando nos dedicamos a defender a nuestros clientes en el foro es a ESPERAR.

Y ello porque difícilmente y bien en un porcentaje muy alto de las vistas y actos judiciales no se suelen celebrar a la hora para la que fueron fijados. Los

motivos para dichos retrasos, entendemos que son consecuencia de distintos motivos:

- a) Mala organización de los señalamientos. Todas vez que no es infrecuente que en los órganos judiciales se señalen vistas y actos procesales cada cierto periodo de tiempo uniforme (5 minutos, 10 minutos, etc.), sin tener en cuenta por la complejidad del asunto, el número de intervinientes, los testigos y peritos que puedan participar en cada asunto concreto. Ello genera que ante la duración y exceso del tiempo consumido por los asuntos de mayor duración, produzca un efecto dominó que supone en retraso de todos los asuntos y actos procesales señalados con posterioridad, produciéndose un retraso en cascada y que aumenta con los retrasos acumulados.
- b) Falta de puntualidad de los componentes de la oficina judicial. El anterior motivo no es el único desgraciadamente. Y es que también se da en algunos casos de que habiéndose señalado diligencias procesales a determinadas horas, los componentes imprescindibles de la oficina judicial, sea el juez, secretario, y en su caso el fiscal, no llegan a su hora, están ocupados en otras diligencias, lo que hace que el comienzo de las mismas se retrasen, dándose el mismo supuesto de retraso y atasco que en el supuesto anterior.

Retraso en la tramitación de los procedimientos:

Y es que no solo existen retrasos en las actuaciones judiciales que son las vistas y actuaciones procesales, también se dan en las distintas fases de la tramitación de los procedimientos, desde su admisión a trámite hasta su resolución, en una eventual segunda instancia e incluso en asuntos que llegan al Tribunal

Supremo en Casación. Se produce de forma sistemática un incumplimiento de normas legales imperativas, cuales son las procesales (lo que podía dar lugar a una eventual nulidad de actuaciones), en la tramitación de las distintas fases procesales, tardando procedimientos, que legalmente podían tener una tramitación procesal de tres a cuatro meses, incluso años en primera instancia, en segunda o en casación. Sin embargo, los plazos para presentar escritos y recursos por parte de nosotros los Abogados, esos si precluyen, hasta el punto de que un escrito presentado fuera de plazo no sirve para nada, e incluso puede generar una posible responsabilidad profesional si se le causa un daño al cliente.

3.7. Celeridad Procesal y Debido Proceso.

La celeridad procesal no es un principio abstracto: muy por el contrario, es el alma del servicio de justicia. Está claro que la existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más breve plazo; y es de su interés que el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. De hecho, esta situación ya se encuentra reconocida constitucionalmente en el derecho comparado y en nuestro proyecto constitucional y resulta también una garantía protegida a nivel supranacional. De hecho, sin celeridad procesal, o mejor dicho, con las indebidas dilaciones que se producen a lo largo del proceso, resulta imposible lograr la paz social. En tal sentido, la búsqueda de la paz social en justicia parte desde el hecho de apaciguar el litigio antes que profundizarlo. Principio de celeridad procesal: Se

refiere a que los actos procesales deberán realizarse en el menor tiempo posible respetando las normas del Debido Proceso; es la expresión más concreta del ahorro de tiempo en forma razonable, acorde con los principios procesales y la normatividad procesal; se expresa en instituciones como la perentoriedad de los plazos, el impulso de oficio, etc. “El principio de celeridad es la manifestación concreta del principio de economía procesal por razón de tiempo. El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones del proceso, por ejemplo, la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o principios como el de impulso oficioso del proceso”. “Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes”.

3.8. Proceso:

Hablar de proceso en su acepción judicial: Es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido

proceso Según (Hernández Lozano, s.f), “El proceso es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos procesales, cumplidos por órganos públicos predispuestos y particulares interesados cuyo fin inmediato es el restablecimiento del orden jurídico alterado, y su fin mediato, la fijación de los hechos y la actuación del derecho”.

3.9. Proceso Civil:

Es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas, por el juez en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley procesal le impone, por las partes y los terceros cursadas ante órgano jurisdiccional en ejercicio de sus poderes, derechos, facultades y cargas que también la ley les otorga, pretendiendo y pidiendo la actuación de la ley para que: dirima la controversia, verificado que sean los hechos alegados.

CONCLUSIÓN

Ahora bien cómo podemos observar, los factores que no permiten desarrollar de acuerdo a los plazos procesales establecidos por la ley son diversas, los cuales ha venido perjudicando enormemente a los justiciables. Sin embargo pese a no cumplirse con los plazos establecidos, casi nada o poco se ha hecho para solucionar este enorme problema.

En tal sentido se concluye que los efectos de la inaplicación de los principios de celeridad procesal perjudican enormemente a los ciudadanos inmersos en algún proceso judicial.

En ese sentido buscaremos alternativas inmediatas que nos permitan dar una solución idónea a fin de salvaguardar la justicia.

3.10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN CUANTO AL CONGESTIONAMIENTO JUDICIAL.

Reforma Estructural de la Administración de Justicia A corto y largo plazo, debe impulsarse no solo una reforma de la legislación, sino también, y quizás con mayor relevancia, un proyecto a nivel de los órganos ejecutivos a fin de que se permitan estos objetivos:

a) Una mayor capacitación de los operadores jurisdiccionales, a fin de tener mayores conocimientos y destreza en el manejo de las instituciones procesales, para resolver con prontitud las causas.

b) La incorporación progresiva de directivas a fin de remodelar el despacho judicial, incorporando de ser posible mayor personal en áreas críticas de la administración de justicia, como en el caso de tutela urgente de derechos.

c) La promoción de capacitación de asistentes jurisdiccionales preferentemente con aptitud para el manejo de procesos complejos, los cuales son el soporte de la administración de justicia y deberán permitir el desarrollo de mejores condiciones de celeridad y de atención al proceso. Más aún, la capacitación debería extenderse a los propios magistrados, los cuales debe estar orientados a la Conciliación Intraprocesal y al manejo efectivo de la Audiencia con los justiciables, a fin de viabilizar un proceso amparado en el Principio de Oralidad.

d) La búsqueda de mayores y constantes recursos económicos que permitan un ingreso decoroso al sistema judicial, el cual constantemente se somete a la

consideración del Ministerio de Economía y Finanzas para tal efecto, como ha ocurrido recientemente con la creación de nuevos Juzgados y Salas Anticorrupción.

e) Una eficiente y definitiva política jurisdiccional que debe ser impulsada por las instancias más altas del Poder Judicial, para solucionar definitivamente con el problema de la sobrecarga procesal. De acuerdo con (Berizonde, 1999) Sobre este tema, ya se ha dado muchas perspectivas en el plano doctrinario respecto a propuestas concretas para descongestionar el despacho judicial actual pero es lamentable que en nuestro país se hayan recurrido necesariamente a medidas aisladas, sin que exista una estrategia integral y de amplia participación, sobre todo de los justiciables y abogados, principales perjudicados por la atención del Poder Judicial.

Ahora bien, veamos algunas reformas:

3.11. Las Medidas Autosatisfactivas y la Tutela Urgente

Es una clara necesidad de nuestro aparato judicial el que pueda prever una serie de mecanismos para atender casos en los cuales el derecho invocado resulta más que aparente, como en el caso de las medidas cautelares, una concesión de una medida aún más rápida, sin que sea sacrificado el aspecto de las garantías concernientes al derecho de defensa. En tal sentido, se produce una Antelación de la Tutela Jurisdiccional a través de la cual, solo se requiere prueba inequívoca de lo

peticionado, la fundamentación del caso, lo cual debe tener la suficiente fuerza para garantizar la certeza de derecho, y por ende su tutela inmediata.

Según (Castro Filho, 1996) Por ejemplo, en Brasil este tipo de tutela posee características peculiares como el requerimiento necesario de parte, la prueba inequívoca (hechos fuertemente probados), la convicción de veracidad por parte del juez (más humo de derecho– *fumus bini uiris* debe existir la centella del buen derecho – *centilla boni iuris*), el recelo justificado de daño irreparable o de difícil reparación, la existencia de un abuso del derecho de defensa (una sanción para quien lesiona el derecho tutelado con una dilatoria defensa) y la ausencia de peligro de posibilidad de reversión de la medida por resolución definitiva en el principal (es decir, que en el expediente principal no se contradiga el derecho tutelado en el incidente)

3.12. Justicia de Paz

El papel de la Justicia de Paz en el Perú ha sido históricamente relegado, hasta no hace mucho. En efecto, el Juez de paz contaba con papel importante dentro de las provincias del país, con la solución de conflictos en los cuales intervenía como conocedor del Problema.

La realidad nacional nos señala que en nuestro país subsisten muy arraigado el concepto de comunidad, así las Comunidades Campesinas han tenido y tienen un rol vital en el mundo andino , prueba de ello es la Organización de las Rondas Campesinas y su lucha contra la delincuencia común y la violencia terrorista que

azotó nuestro país en la década de los ochenta y parte de los noventa y la vigente defensa que vienen haciendo frente a la contaminación ambiental producidas por algunas empresas mineras que nuevamente dejan heridas en aquellas venas abiertas que Galeano señalaba en Latinoamérica.

Las luchas de las Comunidades Campesinas contra la contaminación minera es una lucha no solamente ecológica sino también una lucha por sobrevivir frente a la capital que pudiendo ser necesario para el desarrollo de una región se convierte en un elemento de podredumbre para la región de empobrecimiento para el campesino y de un evidente enriquecimiento para la empresa.

La Justicia de Paz se encuentra necesariamente asociada al concepto de Justicia de Menor Cuantía, ya que por lo general no resulta coherente que se congestione la justicia central con temas de índole económico menor, por lo que debería circunscribirse dicho tema a una justicia más cercana al ciudadano, descentralizada y de fácil acceso.

3.13. A modo de conclusión

Todas las propuestas que se han expuesto hasta el momento, deben entenderse en el marco de la desconcentración de la justicia, la cual se encuentra orientada a la progresiva creación de entes jurisdiccionales locales, que permitan acercar la justicia a los ciudadanos, tratando de redimensionar las competencias existentes de los juzgados de Primera Instancia y de Paz, favoreciendo que dicho acercamiento se produzca dentro de una audiencia oral que evite el formulismo que retrasa las causas, y con una mentalidad positiva por parte de los operadores

jurisdiccionales, quienes deben proceder con prudencia, destreza y espíritu conciliador ante la oralidad; y los justiciables, quienes con buena fe deben proceder en el proceso y con ello se devuelva la confianza a las instituciones judiciales existentes. En suma, la celeridad procesal resulta indispensable para la consecución del ideal de la tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto, del universal acceso a la justicia.

Todos estos cambios tienen que ser analizados a la luz de dos tendencias procesales modernas que se contraponen: el eficientismo procesal versus el garantismo procesal, a fin de evitar que la poca o excesiva celeridad de los procesos se contraponga al debido proceso y las garantías de la administración de Justicia. Sin embargo, hay que ser cautelosos en este proceso, procurando esencialmente que no gane el entusiasmo al debido proceso, y a las garantías que debe reunir el proceso, para evitar caer en lo que con acierto menciona Omar Benaventos: “De no conjurar la “técnica “con la estructura” que sostenga y la haga viable, corremos el riesgo de engendrar una criatura que termine devorando a su bien intencionado progenitor”.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

A este nivel de la investigación se procede a realizar los análisis de los resultados obtenidos mediante la observación efectuada dentro de la realidad planteada, para tal fin se ha dividido la labor de verificación en dos sectores; el primero conformado por la verificación de los expedientes de los juzgados civiles de la ciudad de Chiclayo, sobre las siguientes materias: desalojo, reivindicación, mejor derecho a la propiedad y nulidad de acto jurídico; las cuales fueron seleccionadas en razón a la incidencia en la carga procesal verificada en todos los juzgados civiles, además de su relevancia civil, siendo de otro lado importante referenciar las vías procesales en las que se ventilan, como es el caso de procesos sumarísimos y de conocimiento; luego el segundo sector del análisis conformado por la opinión de los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.

4.1 Resultados del Análisis Jurisprudencial

En el capítulo anterior hemos recogido jurisprudencia relacionada con nuestro tema de investigación, las mismas que serán analizadas en este acápite, análisis que será direccionada a verificar los estándares, en cuanto a la demora al momento de calificar o proveer los escritos presentados por las partes. Veamos los siguientes cuadros.

4.2 Cuadros Estadísticos (Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque)

Tabla 1: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre desalojo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

DESALOJO				
VIA PROCEDIMENTAL: Proceso Sumarísimo				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROCESO: 73 días (2 meses y 13 días)				
EXPDEDIENTE	INGRESO	ADMISIBILIDAD	SENTENCIA	DURACIÓN
00001-2015	16 / 03 /2015	16/07/2015	19/03/2019	3 años 8 meses 3 días
00002-2015	21/10/2015	20/01/2016	01/05/2019	3 años 3 meses 12 días
00044-2015	15/02/2015	30/06/2015	8/04/2017	1 año 9 meses10 días
00045-2015	18/02/2015	25/05/2015	31/01/2019	3 años 8 meses 6 días
00051-2015	5/02/ 2015	5/06/2015	20/10/2015	4 meses 15 días

Tabla 2: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre reivindicación en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

REIVINDICACION				
VIA PROCEDIMENTAL: Proceso de Conocimiento				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROCESO: 245 días (8 meses y 5 días)				
EXPDEDIENTE	INGRESO	ADMISIBILIDAD	SENTENCIA	DURACIÓN
00059-2015	4/03/ 2015	8/07/2015	10/01/2018	2 años 6 meses 2 días
00077-2015	13/02/2015	13/05/2015	24/06/2016	1 año 1 mes 11 días
00081-2015	10/03/2015	15/06/2015	18/05/2018	2 años 11 meses 3 días
00110-2015	5/06/2015	15/10/2015	20/10/2016	1 año 1 día
00125-2015	7/10/2015	15/12/2015	20/11/2017	1 año 11 meses 5 días

Tabla 3: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre Mejor Derecho a la Propiedad en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

MEJOR DERECHO A LA PROPIEDAD				
VIA PROCEDIMENTAL: Proceso de Conocimiento				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROCESO: 245 días (8 meses y 5 días)				
EXPDEDIENTE	INGRESO	ADMISIBILIDAD	SENTENCIA	DURACION
00003-2015	5/01/2015	15/05/2015	20/06/2018	1 año 1 mes 4 días
00014-2015	14/06/2015	20/09/2015	16/07/2018	2 años 9 meses 26 días
00015-2015	6/09/2015	6/12/2015	20/07/2018	2 años 7 meses 14 días
00020- 2015	19/10/2015	20/12/2015	3/08/2017	1 año 7 meses 13 días
00063-2015	12/02/2015	15/05/2015	26/04/2018	2 años 11 meses 11 días

Tabla 4: Descripción temporal del desarrollo de procesos sobre Nulidad de Acto Jurídico en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

NULIDAD DE ACTO JURIDICO				
VIA PROCEDIMENTAL: Proceso de Conocimiento				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROCESO: 245 días (8 meses y 5 días)				
EXPDEDIENTE	INGRESO	ADMISIBILIDAD	SENTENCIA	DURACIÓN
00002-2015	23/02/2015	28/03/2015	17/02/2018	2 años 11 meses 4 días
00005-2015	19/02/2015	19/05/2015	23/10/2017	2 años 4 meses 4 días
00018-2015	5/01/2015	9/04/2015	27/11/2016	1 año 7 meses 18 días
00031-2015	9/08/2015	11/06/2015	15/12/2017	2 años 6 meses 4 días
00041-2015	26/03/2015	29/07/2015	18/10/2018	3 años 2 meses 20 días

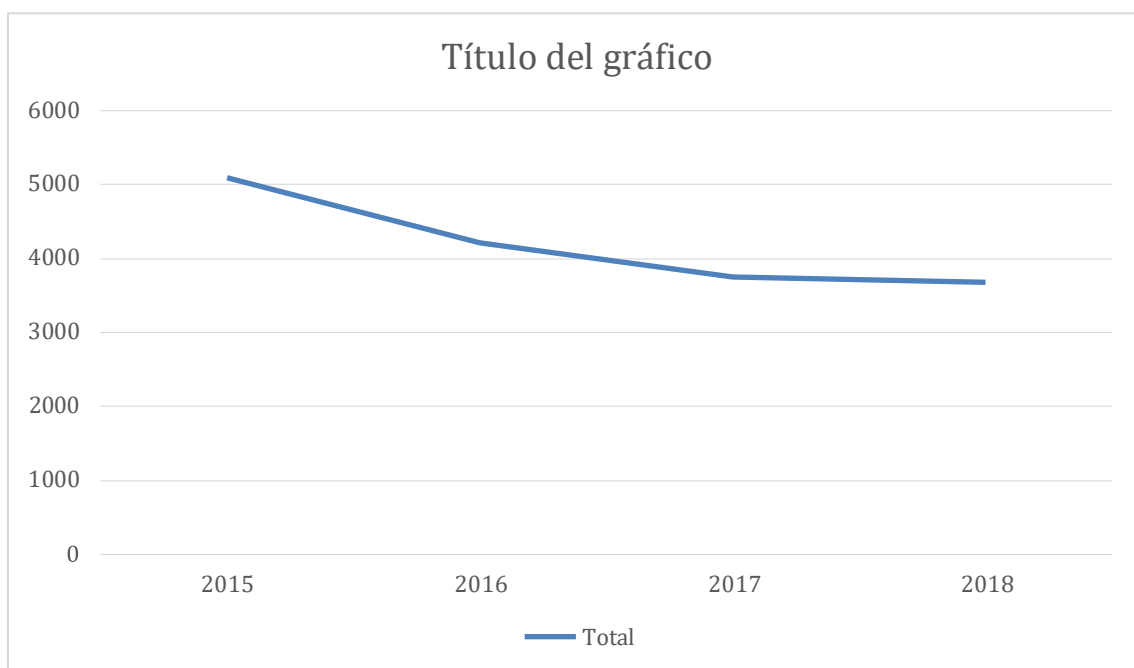
De los cuadros podemos observar que los procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, para su admisibilidad tarda un tiempo mínimo de tres meses, y desde la admisión hasta la sentencia ha transcurrido un tiempo aproximadamente de 4 años, considerando que algunos procesos aún están en curso.

Año	2015	2016	2017	2018
Total	5087	4209	3753	3683

Siendo esta nuestra preocupación de buscar alternativas para dar una mayor celeridad a los procesos judiciales a fin de beneficiar a los miles y miles de justiciables.

Es importante analizar la Carga procesal en los diferentes juzgados civiles de la ciudad de Chiclayo en la corte Superior de Justicia de Lambayeque, para lo cual se ha tomado la estadística de la producción en los juzgados desde los años 2015 a 2018

Ilustración 1: Producción judicial de manera general de los juzgados civiles de Lambayeque entre los años 2015 – 2018



Del presente gráfico, se puede acotar que en si la producción judicial en los juzgados civiles de Lambayeque entre los años 2015 – 2018 han ido decreciendo, con lo que se podría asumir que la carga procesal en los juzgados antes mencionados a manera general han ido reaccionado de una manera positiva, permitiendo a estos que se concentren en procesos mucho más complejos.

**Carga procesal de los juzgados civiles en la ciudad de Chiclayo de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, procesos de Desalojo,
Reivindicación, Mejor derecho a la propiedad y Nulidad de Acto Jurídico**

2015-2018

JUZGADO	CARGA POR AÑO			
	2015	2016	2017	2018
1° Juzgado	18	10	9	12
Civil				
2° Juzgado	16	24	11	19
Civil				
3° Juzgado	14	16	29	21
Civil				
4° Juzgado	12	13	12	14
Civil				
5° Juzgado	24	21	05	30
Civil				
6° Juzgado	23	26	42	30
Civil				

7° Juzgado	11	13	23	43
Civil				
8° Juzgado	17	18	11	18
Civil				
TOTAL	137	142	147	153
Elaboración: Of. Estadística – CSJLA				
Fuente: SIJ				

Tabla 5: Producción judicial de manera específica de los procesos de desalojo, reivindicación, mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico; tramitados en los juzgados civiles de la Ciudad de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque entre los años 2015- 2018

Año	2015	2016	2017	2018
Total	137	142	147	153

Ilustración 2: Producción judicial de manera específica de los procesos de desalojo, mejor derecho de posesión e interdictos; tramitados en los juzgados civiles de Lambayeque entre los años 2015- 2018.



De lo expuesto en las presentes gráficas, se puede apreciar que, en el transcurso de los últimos cuatro años, la carga procesal respecto a los procesos que han sido anteriormente analizados en función a la demora de su trámite, lo cual se entiende que ido aumentando, lo mismo que permite evidenciar un efecto negativo de esta sobre el principio de economía procesal, toda vez que la demora genera un sobre esfuerzo del aparato judicial, incremento de costos del proceso para los justiciables y la demora en si que se proyecta como una justicia tardía.

4.3 Entrevistas Aplicadas A Jueces y Especialistas De la Corte Superior de Justicia De Lambayeque

A fin de tener un mayor entendimiento realizamos diversas encuestas con el objeto de tener datos más exactos sobre la presente investigación.

1. ¿Que Factores Principalmente No Permiten Cumplir Con Los Plazos Establecidos En El Código Procesal Civil?

Las respuestas fueron diversas, pero veamos algunas:

Sobrecarga procesal, falta de personal y material logístico.

- La recargada carga procesal, actuaciones a realizarse dentro y fuera del juzgado como son audiencia, actuación al público.
- La carga procesal, la falta de técnica jurídica en las solicitudes presentadas por los abogados (oscuros o ambiguos), falta de revisión del expediente en prácticas dilatorias como nulidades contra resoluciones judiciales.
- La carga procesal, el poco personal que tenemos en el poder judicial para cumplir con la labor, falta de recursos y logística.
- La carga laboral, la interrupción de los abogados y los justiciables que la mayoría de proveídos son autos y ameritan estudio completo del expediente.

- La carga procesal especialidad la materia de carga expediente ello conlleva a que haya expedientes que sean revisados con mayor tiempo que otros.
- La cantidad de expedientes, la carga procesal, los reiterados escritos de los abogados, la falta de personal y la falta de mobiliario, de computadoras nuevas.
- La carga procesal dado que hay muchos expedientes en trámite.
- La elevada carga procesal por cuanto el código prevé plazos perentorios.
- La sobrecarga procesal, la falta de personal, la sobrecarga de funciones, el secretario realiza labores múltiples que no permiten cumplir con los plazos establecidos, fallas en el sistema judicial.
- Los escasos órganos jurisdiccionales y las diferentes zonas geográficas del país que impiden una comunicación rápida.
- La carga procesal, falta de personal.
- La sobrecarga procesal, falta de personal administrativo y jurisdiccional.
- La carga procesal, abundantes procesos.
- Falta de personal idóneo para desempeñar las labores, la sobrecarga de procesos.

- La rotación constante de los jueces, secretarios y asistentes, el personal que está en el juzgado civil esta con sobrecarga procesal, falta de creación de juzgados transitorios.
- Los factores principales son la carga laboral que existen en los diferentes juzgados, el sinnúmero de audiencias, el desabastecimiento de material logístico, la sobrecarga a los especialistas sin contar con asistentes ni mucho menos secretarios.
- Debido a la amplia carga procesal.
- Uno de los factores principales es la excesiva carga procesal existente en los juzgados.

2 Que Alternativas Sugiere Para Acelerar Los Procesos Judiciales?

- Que nos brinden más personal, más personal logístico.
- Un secretario más por juzgado, más personal.
- Hacer los pedidos precisos de acuerdo a la etapa procesal del expediente, la oralización, instalar audiencias únicas sin importar la vía procedimental en función de la economía procesal.
- No plantean los abogados bien lo que piden.
- Capacitación del personal jurisdiccional, capacitación para los abogados para que presenten escritos dentro del plazo de la ley.

- Que se establezca un horario de atención al público el cual debe hacerse respetar.
- Que implementen más órganos jurisdiccionales.
- Modificar las normas procesales que son obsoletas, implementar el expediente electrónico de lo contrario contratar más personal.
- Que haya más personal.
- Es más que todo un tema económico se requiere más personal los instrumentos adecuados para poder trabajar, espacios que estén debidamente distribuidos, buenas computadoras, el sistema es obsoleto.
- Se debe determinar la carga procesal de los juzgados en categoría (juzgados con carga A, carga B, carga C con todo su personal).
- Creación de más órganos jurisdiccionales, integración del país por medio de vías de comunicación, formar en la conciliación a los estudiantes de derecho.
- Implementación de más juzgados, más personal.
- Más personal en el órgano jurisdiccional, implementación de adecuados juzgados.
- Más personal, creación de juzgados de descarga procesal.

- La implementación del expediente judicial electrónico, distribución del personal equilibrado; sacando donde sobra y poniendo donde hace falta.
- Crear más secretarías en los juzgados, no rotar constantemente a los secretarios y asistentes, crear juzgados transitorios.
- Que el poder judicial implemente personal especialista, asistentes, secretarios, material logístico (papel de computadoras, otros útiles de oficina). Además implementar el sistema judicial, los responsables de las notificaciones deberían tener actualizado su sistema para controlar la validez de las notificaciones teniendo especialistas, asistentes, secretarios, buen material logístico, la central de notificaciones abastecida.
- Creación de juzgados transitorios.
- Tener un personal más capacitado en el poder judicial y en defecto capacitar al que ya tiene.

3. Considera Ud. Viable Que La Atencion Al Publico En Los Juzgados Debe Ser Despues De Las 3:45 Pm En Hora Exclusiva, Por Un Tiempo De Una Hora?

- Si considero que es necesario.
- Si considero la atención al público por ejemplo.

- No en una hora.
- No considero.
- No considero.
- No, considero la atención de los usuarios por mesa de partes.
- Si considera.
- No, considero que tiene que haber una mesa de partes que atienda al público.
- No considero porque considero las labores desde la mañana hasta la tarde son suficientes.
- No considero porque no es una solución.
- No considero estoy de acuerdo con el horario establecido.
- No considero la jornada del trabajador termina a las 4:45 pm; 3 horas de atención al público de 8:00 a 10:00 AM y 2:30 a 3:30 PM lo cual deja para proveer despacho 5 horas.
- No considero el horario de trabajo es suficiente.
- No considero, estoy de acuerdo con el horario establecido.
- No considero porque se respeta el horario de trabajo que amparan las normas.

- El horario establecido está bien, se debería en mesa de partes implementar una oficina de información al usuario con acceso al sistema de expedientes.
- Si lo considero viable ya que en otras cortes superiores atienden desde las 3:00- 5:00 PM.
- Considero que además de la atención en mesa de partes como por los especialistas deben implementarse en horario de 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Además mesa de partes debe atender después de las 3:45 PM ya que muchas demandas, escritos no se logran ingresar y dificulta la celeridad procesal.
- La atención actual es idónea pues se fracciona en la mañana y en la tarde, no solo en las tardes limitando la interacción entre el órgano dinámico juez- secretario y el administrado.
- La atención al público es de 8:00-10:00 AM y 2: 30-3:45 PM son el horario conveniente.

4 Fin De Descongestionar La Carga Procesal Para El Juez. Considera Que Ciertos Escritos Deberia Resolver El Secretario? Cuales Por Ejemplo

- El secretario resuelve escritos como por ejemplo: variación de domicilio, apersonamiento, apelación.

- No porque el secretario judicial proyecta la mayor parte del despacho.
- Si las excepciones, las solicitudes cautelares, nulidades o cualquier auto procesal que no sea sentencia.
- El juez sentencia, califica una excepción. La secretaria: expediente listo para sentenciar, resolver las excepciones.
- Si todos los escritos resuelve el secretario, el juez sentencia y resuelve algunas excepciones.
- Considero que la única carga que tiene el juez es la sentencia. Los secretarios resuelven las excepciones, las nulidades, las observaciones a las liquidaciones, las oposiciones a las medidas cautelares y todo tipo de auto a excepción de las sentencias también los abandonos.
- Secretario resuelve nulidades, observaciones, liquidaciones, autos finales o sea autos de archivos entre otros.
- Todos los escritos resuelve el secretario, el juez solo sentencia.
- En la ley orgánica está estipulado lo que debe resolver el juez y secretario.
- Los secretarios proyectan resoluciones de mero trámite. El juez resuelve las resoluciones.
- Todos los escritos los resuelve el secretario. El juez se encarga de la audiencia y sentencia.

- El secretario proyecta como es resolver una nulidad, una oposición. El juez sentencia.
- El secretario resuelve la mayoría de resoluciones, el juez solamente sentencia.
- El secretario resuelve casi todas las resoluciones. El juez sentencia.
- Los escritos son resueltos por el secretario, excepto las sentencias y el juez revisa los escritos antes de firmarlos.
- En la práctica la carga procesal está en las secretarías y en realidad ellos resuelven excepciones y otras cuestiones que no sean sentencias, los secretarios si resuelven, eso se viene dando, más bien es un abuso.
- Actualmente ya ciertos escritos que solo resuelve el secretario como los de mero trámite como son los decretos. Considero que los escritos que se van a resolver a través de un auto si debe ir la firma del juez a fin que este valore la motivación de la resolución.
- Considero que en los escritos para mero trámite los decretos deben resolverse por secretaria. Además en los procesos de ejecución deben proyectarse con mayor celeridad y los secretarios deberían tener la potestad coercitiva y/o sancionadora para tener un estricto cumplimiento por parte de la parte vencida.
- Ningún escrito debe ser resuelto por los secretarios. La facultad resolutoria es únicamente capacidad de los jueces en mérito al

principio de legalidad, motivación judicial y el principio de IURIA
NOVIT CURIA.

- El secretario debería resolver la mayoría de escritos exceptuando apelaciones de resolución, apelaciones de sentencia, una contestación de demanda.

4.4 Encuestas Aplicadas A Jueces Y Especialistas De la Corte Superior de Justicia De Lambayeque

De las encuestas aplicadas podremos entender con mayor precisión nuestro tema de investigación. Ahora veamos algunas interrogantes.

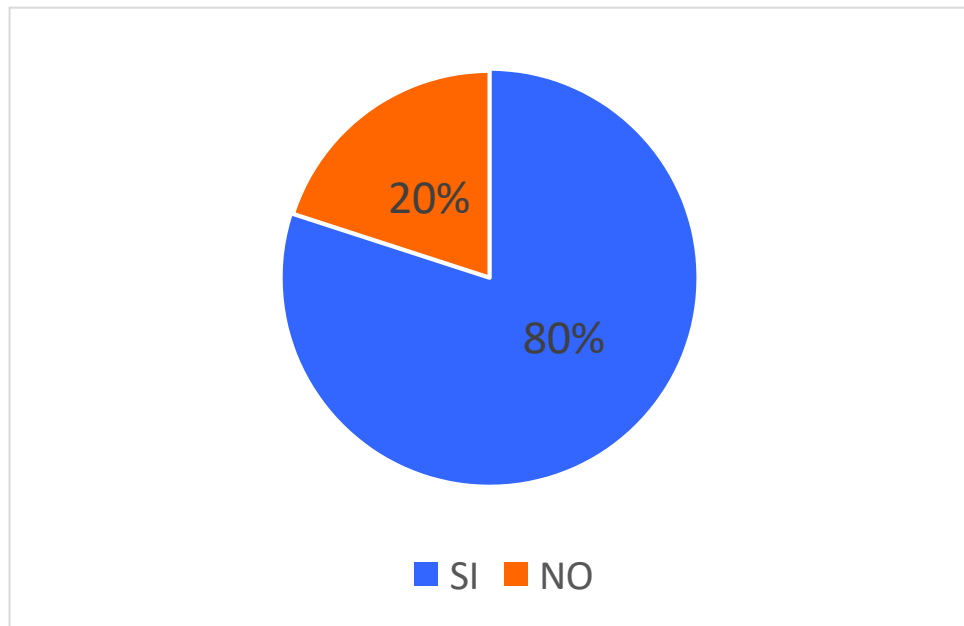
1. ¿Cree que se cumplen los plazos de procedimiento como se establece en el código procesal civil?

Planteada la interrogante y absuelta la misma, obtuvimos los siguientes resultados: los mismos que para un mejor estudio hemos tabulado gráficamente, conforme se aprecia líneas más adelante.

Tabla 6: Respuestas de la pregunta N° 1 de la encuesta aplicada a los Jueces y Especialistas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

NO	SI	TOTAL
40	10	50

Ilustración 3: Gráfico porcentual de las respuestas de la pregunta N° 1 de la encuesta aplicada a los Jueces y Especialistas en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque



Análisis:

De las 50 personas, 40 de ellas que representan el 80% entre fiscales, jueces y especialistas consideran que **NO** se cumplen los plazos y debería plantearse ciertos parámetros que coadyuven al cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal, porque si bien es cierto, se ha venido manteniendo un sistema procesal como válido; sin embargo el legislador peruano ha guardado silencio y ha dejado de buscar alternativas de solución ante el incumplimiento de un principio rector de la justicia.

Las otras 10 personas que representan al 20%, consideran que si se cumplen los plazos, y que buscar alternativas sería contravenir y alterar los principios rectores ya establecidos en la norma adjetiva.

4.5 Encuestas Realizadas A Los Ciudadanos Involucrados En Un Proceso Judicial.

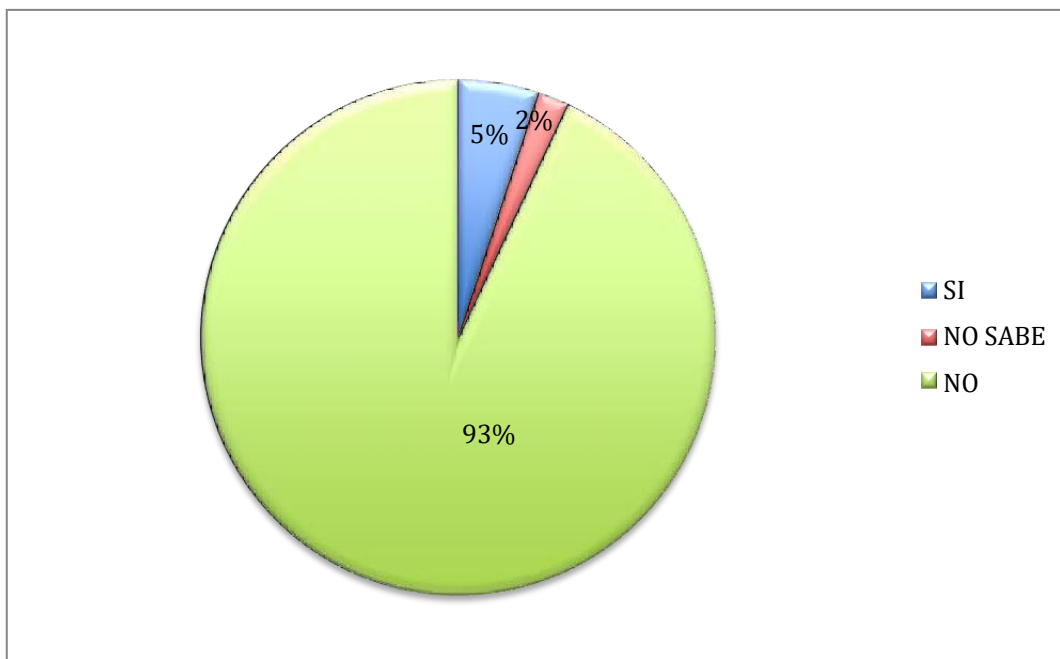
2. Siente usted que las sentencias que emite el poder judicial están dentro del plazo justo?

Planteada la interrogante y absuelta la misma, obtuvimos los siguientes resultados: los mismos que para un mejor estudio hemos tabulado gráficamente, conforme se aprecia líneas más adelante.

Tabla 7: Respuestas de la pregunta N° 2 de la encuesta aplicada a los ciudadano involucrados en un proceso judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

NO	SI	NO SABE	TOTAL
93	05	02	100

Ilustración 4: Gráfico porcentual de las respuestas de la pregunta N° 2 de la encuesta aplicada a los ciudadano involucrados en un proceso judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque



Análisis.

De las 100 personas encuestadas, 93 que representan el 93%, creen que las sentencias emitidas por el poder judicial, no se ajustan a sus expectativas de justicia que esperaban recibir.

Asimismo 5 personas que representan 5% del total, señalan si cumplió sus expectativas

Y finalmente solo 2 personas que representan el 2% del total no saben no opinan sobre la interrogante planteada.

Ahora bien cómo podemos advertir del análisis, que nuestra investigación encuentra los resultados apropiados para plantear

parámetros y otras alternativas que coadyuven a desarrollar mejor los principios de celeridad y economía procesal.

Toda vez que de los resultados se puede comprobar que la norma no se ajusta a la realidad social. Y por ende es preciso que el operador jurídico eche una mirada a los efectos jurídicos que está teniendo en la sociedad los principios que durante años vienen rigiendo.

CAPITULO V

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

5.1. Discusión De Los Resultados

5.1.1 Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la teoría jurídica de los principios procesales en el ordenamiento legal peruano”.

Sobre la comprobación de validez de este objetivo específico conviene recordar el desarrollo de la investigación cuando se indicó que existe una falta de aplicación del principio de celeridad y economía procesal estamos haciendo referencia a la protección que busca el hombre de todo tipo de riesgo, ya sea en lo personal, social, económico o de cualquier otra índole, pero siempre tratando que sus actos que realiza (actos socio-económicos) tengan la garantía y estén respaldados por las instituciones del Estado, conllevando de este modo a una convivencia de paz y armonía entre los ciudadanos.

Precisamente tal desarrollo teórico conlleva a entender la naturaleza jurídica de los principios en el derecho, como aquellas reglas de optimización que tienen por finalidad marcar los parámetros o servir de directrices para que la ejecución de las reglas se cumplan a cabalidad, que para el caso estudiado, el carácter procesal de los principios ordenan el respeto por la estructura que se ha diseñado para el proceso civil, que en tanto control de la temporalidad permiten consecuencia la seguridad jurídica dentro del esquema.

Así también se recuerda a Castellano, R. & Martínez Báez cuando señala que, es el Estado quien otorga seguridad, garantizando que los derechos de las personas sean ejercidos bajo el imperio de la ley, y no de la arbitrariedad, de tal modo que permita que la sociedad se desarrolle de manera plena. Pues sin seguridad no florecen la libertad, la democracia y la justicia; sin seguridad no es posible el desarrollo de los pueblos. De ahí que muchas veces la seguridad sea considerada como el primer deber del Estado.

De estos conceptos podemos deducir la importancia de este contenido del principio de celeridad procesal y economía procesal.

En razón a estos conceptos es que nace la discusión, toda vez que aplicándose a nuestra realidad, este concepto pierde certeza más aún cuando se trata de principios rectores.

En ese sentido, la idea de la importancia de la Seguridad Jurídica, de acuerdo al estudio realizado, sobre el grado de confianza y seguridad que tienen los mismos ciudadanos dentro del proceso, esto es a ser atendidos a tiempo; para la cual tuvimos que interrogarles sobre si Siente seguridad al adquirir mediante contrato de compraventa un bien inmueble. El mismo que se obtuvo:

De las cien (100) personas seleccionadas, noventa y tres (93), que representan el 93%, respondieron que las sentencias con las que se pone fin al

proceso judicial no satisfacen las expectativas de justicia, puesto que el plazo que tarda en resolverse una cuestión litigiosa es demasiado largo el cual lo hace injusto

Esto nos conlleva a analizar y determinar qué seguridad Jurídica implica, no solo tener los mecanismos de defensa que señala en código civil, sino también implica que un proceso judicial resuelto a tiempo.

Finalmente se debe indicar respecto al objetivo específico bajo discusión que: Los efectos que acarrea la falta de aplicación del principio de celeridad procesal, son devastadores, puesto que una JUSTICIA TARDÍA NO ES JUSTICIA, llegando a durar muchísimos años en litigio, en muchas de la veces el titular de la acción fallece sin encontrar la justicia debida, y esto en el fondo es una inseguridad Jurídica procesal.

5.1.2 Discusión del objetivo: “Estudiar los principios de celeridad y economía procesal para determinar los efectos de su aplicación sobre el congestionamiento judicial.

Sobre la comprobación de validez de este objetivo específico conviene recordar lo desarrollado en la investigación cuando se hace referencia a los dos puntos de vista: desde el punto de vista del principio de Economía Procesal y el principio de Celeridad Procesal.

Si lo vemos desde un punto de vista económico, las pérdidas son cuantiosas, toda vez que con la carga procesal la demanda más tiempo es dar la razón a una de las partes, así como para el estado, al mantener un proceso judicial durante años y este debe ser atendido por un personal remunerado. Así como los daños irreparables que tienen las partes al vivir en la incertidumbre sobre su pretensión.

Y por otro lado si lo vemos desde un punto de vista del Derecho a la justicia del ciudadano, pues este sufre pérdidas irreparables, tanto en lo económico, psicológico y salud. Puesto que muchos de los justiciables enferman, otros agravan y hasta fallecen esperando que su pretensión sea resuelta. Y si hacemos comparaciones entre la utilidad de la norma vigente y la realidad nos encontraríamos contrariados en esos dos sentidos.

En razón a ello nace la discusión que permitirá comprobar la validez de este objetivo específico ¿cuál es la viabilidad jurídica de establecer otros parámetros que complementen al principio de celeridad y economía procesal?, podemos construir la respuesta en cuestión a lo recogido en la discusión del primer objetivo específico que nos deja clara la idea de que el hombre por naturaleza busca seguridad y justicia al momento de verse involucrado en algún proceso judicial, y que este debe ser atendido dentro de un periodo determinado y no dejando a la suerte del tiempo.

Tal aseveración se refuerza con el resultado obtenido de la OFICINA DE ESTADÍSTICA del Poder Judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,

en cual ponemos como ejemplo al Juzgado civil de Chiclayo, el mismo que existe una cantidad abrumante de procesos judiciales que oscilan entre 5 a 6 años que aún no han sido resueltos.

También podemos corroborar de las opiniones de los especialistas, operadores de justicia y conocedores del tema en concreto, en cuya respuesta confirma la regulación de nuevos parámetros que complementen al principio de celeridad. Asimismo mediante una entrevista buscamos las ventajas que implica regular estos parámetros dentro de nuestro actual sistema, y en cuya entrevista manifestaron y dieron algunos aportes y confirmaron que teniendo en cuenta nuestra realidad traería muchas ventajas y que existe una imperiosa necesidad de modificar la norma actual

Todo ello implica, buscar de manera urgente plantear alternativas que solucionen de manera inmediata los múltiples procesos judiciales que no tienen cuando acabar y que vienen perjudicando al país y a los justiciables en mayor medida.

5.1.3 Discusión del objetivo: “Analizar las causas que provocan la inaplicación del principio de celeridad procesal y sus consecuencias sobre el principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015.

Según la verificación de la realidad, se ha podido apreciar en el contexto de los procesos civiles en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que existe un problema de sobre carga procesal, la misma que se debe a diferentes factores,

encontrando entre ellos al más importante para la investigación como lo es el incumplimiento de los plazos que señala el esquema procesal civil, lo cual se verifica como una trasgresión al principio de celeridad procesal debido a tal incumplimiento, lo cual esta generado por otros factores como son la insuficiente cantidad de personal en los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; además de la ausencia de capacitación adecuada para el manejo eficiente de los procesos por parte de los operadores jurisdiccionales; ello como parte de un problema relacionado con el elemento procesal que se refiere al esquema del criterio jurisdiccional, es decir desde el punto de vista subjetivo.

Luego desde otro punto de vista más objetivo, se pudo apreciar una circunstancia que se relaciona con el problema de la insuficiente cantidad de juzgados especializados en lo civil, así como la ausencia de implementación logística que permita el manejo ágil de los procedimientos procesales.

Tal circunstancia se reconoce como una evidente alteración del principio de celeridad procesal en razón de su incumplimiento, lo cual genera sin duda un efecto negativo sobre la eficacia del principio de economía procesal, toda vez que el incumplimiento de plazos produce una alteración del esquema procesal generando mayor costo del proceso que es asumido por la economía del Estado, así como el costo del proceso que asume el justiciable; siendo que esta circunstancia genera además un sobre esfuerzo del personal cuyas aptitudes y posibilidades no son suficientes para semejante carga; sumado a todo ello la consecuente afectación temporal del proceso mismo, trayendo como consecuencia la tardía atención de los

derechos reclamados ante los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

En tales circunstancias se ha podido establecer que efectivamente existe una relación directa de afectación entre el incumplimiento del principio de celeridad procesal y el que corresponde a la economía procesal, toda vez que éste último se ve afectado por el incremento del costo, del tiempo y el esfuerzo innecesarios para la solución de los conflictos civiles.

5.2 Resultados De La Validación De La Hipótesis

En lo que corresponde a estas Variables se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión de los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así tener como resultado la constatación de ésta. Tenemos el siguiente desarrollo:

5.2.1 Respecto a la variable independiente: Inaplicación del Principio de celeridad procesal.

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, la función que ha recibido la nominación de independiente dado que esta envuelve al problema que es la causa que origina el cuestionamiento, el mismo que generó la presente investigación; dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si ante los procesos judiciales instaurados, es correcto o adecuado la implementación de otros parámetros que coadyuven a mejorar la eficiencia de este principio.

La observación de los procesos desarrollados en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, específicamente en los juzgados civiles, permitió verificar la excesiva sobre carga procesal cuyo principal detonante se el incumplimiento de los plazos establecidos en el esquema del proceso civil, siendo ello el principal tenor del principio de celeridad procesal, se puede evidenciar que se esta produciendo su incumplimiento.

Se pudo observar también que las causas que generan este incumplimiento son básicamente la insuficiente cantidad de personal jurisdiccional, la inadecuada capacitación del mismo, así como la ausencia de implementación logística, todo ello trae como consecuencia el incremento de la carga procesal a razón del incumplimiento del principio de celeridad; es por ello que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

En la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se ha verificado la inaplicación del Principio de celeridad procesal causado por personal jurisdiccional insuficiente, ausencia de capacitación, falta de implementación logística.

5.2.2 Respecto a la variable dependiente: Eficacia del principio de

economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado de la doctrina se ha podido comprender que se pretende mantener el sistema procesal sin considerar el daño que causa tanto a las partes y al estado.

En ese sentido se puede decir que, al no configurarse un proceso dentro de un plazo razonable, el proceso deja de ser útil para las partes puesto que los daños causados que sufren estos hacen denigrar, hace dudar de la honestidad de los operadores de justicia, el cual ha traído gran arraigo negativo para la sociedad jurídica. Además el no respetarse los plazos hace que lo resuelto en una sentencia ya no sea justo para alguna de las partes aun si esta fuera la vencedora.

La configuración actual del correcto desarrollo de los procesos judiciales, según lo estudiado, no garantiza de una manera jurídicamente adecuada; **primero**, porque los plazos empleados para resolver los problemas planteados se tornan en irresponsables e injustos para las partes. Y **segundo** porque socialmente no refleja la realidad en cuanto a la seguridad jurídica procesal que esta norma debe brindar,

desencadenando más bien afectaciones de corte económico tanto para el Estado y los particulares; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación.

Se verifica la ineficacia del principio de economía procesal en razón de la ausencia de garantías de seguridad jurídica procesal.

5.3 Contrastación De La Hipótesis

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de las variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

En la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se ha verificado la inaplicación del Principio de celeridad procesal causado por personal jurisdiccional insuficiente, ausencia de capacitación y falta de implementación logística; por lo tanto, se verifica la ineficacia del principio de economía procesal en razón de la ausencia de garantías de seguridad jurídica procesal y demostrada la necesidad de implementación de parámetros en el esquema procesal civil a nivel jurisdiccional a fin de lograr una eficaz solución de conflictos de intereses jurídicos.

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	
HOPÓTESIS INICIAL	HIPÓTESIS CONCLUSIVA
<p>Si, la inaplicación del principio de celeridad procesal se debe a falencias de capacitación o de recursos humanos; entonces, se estará produciendo un efecto negativo sobre la eficacia del principio de economía procesal en el proceso civil, en los Juzgados Civiles de Chiclayo, 2015.</p>	<p>En la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se ha verificado la inaplicación del Principio de celeridad procesal causado por personal jurisdiccional insuficiente, ausencia de capacitación y falta de implementación logística; por lo tanto, se verifica la ineficacia del principio de economía procesal en razón de la ausencia de garantías de seguridad jurídica procesal y demostrada la necesidad de implementación de parámetros en el esquema procesal civil a nivel jurisdiccional a fin de lograr una eficaz solución de conflictos de intereses jurídicos</p>

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva se condice con la hipótesis

inicial, dando por sentado que la configuración del principio de celeridad y economía procesal afecta el pleno desarrollo de los procesos judiciales y por ende una afectación irreparable al justiciable.

CONCLUSIONES

PRIMERO:

Se ha llegado a concluir en función al desarrollo teórico de los principios procesales en el ordenamiento legal peruano; que existen incorporados con la finalidad de ejercer la función de control respecto al desarrollo del proceso civil, esto es, se constituyen como reglas de optimización, que para el caso de esta investigación se ocupan de la temporalidad sobre la que se desarrolla dicho proceso.

SEGUNDO:

Se logró determinar en base al estudio de los principios de celeridad y economía procesal que están destinados para surtir efectos de control respecto al congestionamiento judicial; lo cual según la observación desarrollada en la investigación resulta de una aplicación incompleta, que se puede considerar como una inaplicación del principio de celeridad primero, lo cual trae como consecuencia efectos negativos sobre las características del principio de economía procesal, toda vez que genera problemas de incremento del gasto judicial, esfuerzo y dilación en el tiempo en que se desarrolla el proceso civil.

TERCERO:

Finalmente, luego del análisis de las causas que provocan la inaplicación del principio de celeridad procesal, se identificó a la dilación del tiempo que provoca incumplimiento de los plazos procesales establecidos, lo cual es causado por la excesiva carga procesal de los expedientes atendidos en los juzgados civiles, puesto que genera imposibilidad de atención, lo que se relaciona directamente con el

reducido número de elementos procesales como son el personal jurisdiccional que no se de abasto para la atención de todos los casos en litigio y la escasa logística con la que se cuenta en dichos juzgados; todo ello trae como consecuencia una afectación del principio de economía procesal puesto que provoca incremento del gasto procesal a cargo del Estado, sobre esfuerzo del personal jurisdiccional y demora en la atención de la justicia que trae como consecuencia insatisfacción de los usuarios.

CUARTO:

Como conclusión general se ha llegado a establecer que existe inaplicación del principio de celeridad a causa de factores como la sobre carga procesal, insuficiente personal jurisdiccional, falta de capacitación procesal, lo cual produce una afectación al principio de economía procesal, lo cual demuestra la necesidad de implementación de parámetros en el esquema procesal civil a nivel jurisdiccional a fin de lograr una eficaz solución de conflictos de intereses jurídicos.

RECOMENDACIONES

Se debe considerar que es fundamental y vital que el Derecho se adecúe a las necesidades de la sociedad, pues a medida que esta va evolucionando, es indispensable que nuestro Derecho se adapte a las nuevas circunstancias, en tanto y en cuanto este se encuentra al servicio del hombre, para mantener su convivencia con sus congéneres. Por lo tanto resulta recomendable:

1. La Reforma Estructural de la Administración de Justicia a corto y largo plazo, debe impulsar no solo una reforma en la legislación, sino también, y quizás con mayor relevancia, un proyecto a nivel de los órganos ejecutivos a fin de que se permitan los objetivos del fin social del estado.
2. Buscar estrategias de organizacion conjuntamente con un sistema digital de expedientes que permita la celeridad de los procesos y evitar los elevados gastos tanto para el estado como los justiciables.
3. Exhortar a los operadores de Justicia que frente al incumplimiento de las normas procesales es indispensable optar por una teoría, que busque disuadir de manera inmediata los problemas provocados de la carga procesal, siendo las alternativas señaladas en el párrafo anterior.

PROPUESTAS

a) La incorporación progresiva de directivas a fin de remodelar el despacho judicial, incorporando de ser posible mayor personal en áreas críticas de la administración de justicia, como en el caso de tutela urgente de derechos.

b) La promoción de capacitación de asistentes jurisdiccionales preferentemente con aptitud para el manejo de procesos complejos, los cuales son el soporte de la administración de justicia y deberán permitir el desarrollo de mejores condiciones de celeridad y de atención a los procesos. Mas aún, la capacitación debería extenderse a los propios magistrados, los cuales deben estar orientados a la Conciliación Intraprocesal y al manejo efectivo de la Audiencia con los justiciables, a fin de viabilizar un proceso amparado en el Principio de Oralidad.

c) Una eficiente y definitiva política jurisdiccional que debe ser impulsada por las instancias más altas del Poder Judicial, para solucionar definitivamente con el problema de la sobrecarga procesal. Sobre este tema, ya se ha dado muchas perspectivas en el plano doctrinario respecto a propuestas concretas para descongestionar el despacho judicial actual pero es lamentable que en nuestro país se hayan recurrido necesariamente a medidas aisladas, sin que exista una estrategia integral y de amplia participación, sobre todo de los justiciables y abogados, principales perjudicados por la atención del Poder Judicial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra los artículos II y III del Título Preliminar del Decreto N.º Ley 23201, Exp N° 0023-2003 -AI/TC F.J 21 y 22 (Tribunal Constitucional 22 de Julio de 2004).

Alfredo Gonzaini, O. (1992). *El Debido Proceso. Tomo I*. Argentina.

Berizonde, R. (1999). *Tendencias en la posición del Juez*. Buenos Aires: Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal; El Juez y La Magistratura.

Canelo, R. R. (2015). *La Celeridad Procesal, Nuevos desafíos hacia una reforma integral del proceso civil en busca de la justicia pronta*. Lima. Obtenido de file:///F:/LBROS%20Dº%20DE%20ALIMENTOS/ENERO%202017/LA%20C%20ELERIDAD%20PROCESAL,%20NUEVOS%20DESAFIOS%20%20hacia%20una%20reforma%20inegral%20del%20proceso%20civil%20en%20busca%20de%20la%20JUSTICIA%20PRONTA .pdf

Castillo Quispe, M., & Sánchez Bravo, E. (2012). *Manual de Derecho Procesal Civil*. Lima: Jurista Editores.

Castro Filho, S. O. (1996). *Lineamientos de la Reforma Civil Brasileña*. Buenos Aires: Instituto Panamericano de Derecho Procesal; La Simplificación Procesal - XI ENcuentro Panamericano de Derecho Procesal.

Código Procesal Civil. (2015). *Código Procesal Civil*. Lima: Jurista Editores.

Constitución Política del Perú. (1993). *Constitución Política del Estado*. Lima.

Cornejo, O. S. (2006). *El Principio de Economía Procesal, Celeridad Procesal y la Exoneración de Alimentos*. Obtenido de file:///F:/LBROS%20Dº%20DE%20ALIMENTOS/ENERO%202017/RE_DEECHO_PRINCIPIOECONOMIA.PROCESAL_CELERIDAD.PROCESAL_EXONERACION.ALIMENTOS_TESIS.pdf

Couture, E. J. (2005). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Montevideo: Editorial IB de F.

De La Torre, M. R. (2017). *El Principio de la Economía Procesal*. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/45931584/EL-PRINCIPIO-DEECONOMIA-ROCESAL

Escobar, A. J. (2013). *Derecho Procesal Civil*. Lima: Universidad Cesar Vallejo.

Gelzi Bidart, A. (1996). *¿Acceso a la Justicia o al Poder Judicial?* Buenos Aires: Instituto Panamericano de Derecho Procesal.

Gutiérrez, J. Y. (2017). *El Principio de Celeridad Procesal y su eficaz aplicación para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva*. Obtenido de file:///F:/LBROS%20Dº%20DE%20ALIMENTOS/ENERO%202017/EL%20PRINCIPIO%20DE%20CELERIDAD%20PROCESAL%20Y%20SU%20EFICAZ%20APLICACIÓN%20PARA%20GARANTIZAR%20EL%20DERECHO%20A%20LA%20TUTELA%20JURISDICCIONAL%20EFECTIVA.pdf.

Hernández Lozano, C. (s.f). *Manual de Derecho Procesal Civil*. Ediciones Jurídicas.

Hurtado Reyes, M. (2009). *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*. Lima: Idemsa.

Hurtado Reyes, M. (2009). *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*. Lima.

Laguna, C. J. (2017). *La Aplicación del Principio de la Economía Procesal en los Procedimientos Contenciosos, Tributarios y su Vinculación con los Principios de Celeridad y Verdad Material Contenidos en la LPAG*.
Obtenido de
<file:///F:/LBROS%20D%20DE%20ALIMENTOS/ENERO%202017/la%20aplicación%20del%20principio%20de%20economia%20procesal%20en%20los%20procesos.pdf>

Montero Roca, J. (1994). La Legitimación en el Código Procesal Civil. *Revista de la Universidad de Lima*, 14.

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre la población a estudio. *Int. J. Morphol.*, 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Palacio Lino, E. (1983). *Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Palacios, G. C. (2017). *Principios Procesales*. Obtenido de http://www.ucasalvm.com.ar/derechophp/.admin/archivos/4e00f1705aebbPrincipios_Procesales.pdf

Rioja Bermudez, A. (2009). *El Proceso Civil*. Arequipa: Adruss S.R.L.

- Rioja, B. A. (2017). *Celeridad Procesal*. Lima. Obtenido de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2008/12/01/celeridadprocesal-y-actuacion-de-la-sentencia-impugnada-en-el-proceso-civilperuano/>
- Sánchez Velarde, P. (2004). *Manual de Derecho Procesal*. Lima: IDEMSA.
- Walpole, R., & Myers, R. (1966). *Probabilidad y estadística* (Cuarta ed.). México: McGraw_Hill.
- White, W. O. (2008). *Teoría General del Proceso*. Costa Rica: Poder Judicial. Escuela Judicial.
- Zumaeta Muñoz, P. (2015). *Temas de Derecho Procesal Civil*. Lima: Jurista Editores.
- Zumaeta, P. (2015). *Temas de Derecho Procesal Civil*. Lima: Jurista Editores.